
PERÍODO 138°

DIARIO DE SESIONES

28^a REUNIÓN
23^a SESIÓN ESPECIAL

29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2020

AUTORIDADES

Presidenta:

Doctora **CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER**

Presidenta Provisional:

Senadora **CLAUDIA LEDESMA ABDALA**

Vicepresidente:

Senador **MARTÍN LOUSTEAU**

Vicepresidente 1º:

Senador **MAURICE FABIÁN CLOSS**

Vicepresidenta 2ª:

Senadora **LAURA ELENA RODRÍGUEZ MACHADO**

Secretario Parlamentario:

Señor **MARCELO JORGE FUENTES**

Secretaria Administrativa:

Señora **MARÍA LUZ ALONSO**

Prosecretario Parlamentario:

Señor **JUAN PEDRO TUNESSI**

Prosecretario Administrativo:

Señor **MARIANO RAMIRO CABRAL**

Prosecretario de Coordinación Operativa:

Señor **DIEGO BERMÚDEZ**

SENADORES PRESENTES:

ALMIRÓN, Ana Claudia
BASUALDO, Roberto Gustavo
BLANCO, Pablo Daniel
BLAS, Inés Imelda
BRAILLARD POCCARD, Néstor
BULLRICH, Esteban José
CASERIO, Carlos Alberto
CASTILLO, Oscar Aníbal
CATALFAMO, María Eugenia
CLOSS, Maurice Fabián
COBOS, Julio César Cleto
COSTA, Eduardo Raúl
CREXELL, Carmen Lucila
DE ANGELI, Alfredo Luis
DOÑATE, Claudio Martín
DURANGO, Norma Haydeé
DURÉ, María Eugenia
ELÍAS de PEREZ, Silvia Beatriz
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
FIAD, Mario Raymundo
GIACOPPO, Silvia del Rosario
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GONZÁLEZ, Gladys Esther
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
GONZÁLEZ, Nancy Susana
IANNI, Ana María
KUEIDER, Edgardo Darío
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
LOUSTEAU, Martín
LOVERA, Daniel Aníbal
LUENZO, Alfredo Héctor
MARINO, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Ernesto Félix
MARTÍNEZ, Julio César

MAYANS, José Miguel Ángel
MERA, Dalmacio Enrique
MIRABELLA, Roberto Mario
MIRKIN, Beatriz Graciela
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
PAIS, Juan Mario
PARRILLI, Oscar Isidro
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PILATTI VERGARA, María Inés
POGGI, Claudio Javier
RECALDE, Mariano
REUTEMANN, Carlos Alberto
RODAS, Antonio José
RODRÍGUEZ, Matías David
RODRÍGUEZ MACHADO, Laura E.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
SACNUN, María de los Ángeles
SAPAG, Silvia
SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
SOLARI QUINTANA, Magdalena
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TAIANA, Jorge Enrique
TAPIA, María Belén
UÑAC, José Rubén
VEGA, María Clara del Valle
VERASAY, Pamela Fernanda
WERETILNECK, Alberto Edgardo
ZIMMERMANN, Víctor

ENFERMEDAD:

MENEM, Carlos Saúl

LICENCIA:

ALPEROVICH, José Jorge

ÍNDICE*

1. **Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.** (Pág. 5.)
2. **Convocatoria a sesión especial.** (Pág. 5.)
3. **Asuntos entrados.** (Pág. 5.)
4. **Licencia solicitada por el señor senador Alperovich (S.-3.039/20).** (Pág. 5.)
5. **Mensaje solicitando acuerdo.** (Pág. 5.)
6. **Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto (O.D. N° 716/20.)** (Pág. 6.)

(**Oradores:** Durango, Fiad, Parrilli, Mera, González (N.), Blas, García Larraburu, Verasay, Zimmermann, Duré, Catalfamo, Schiavoni, Sapag, Closs, Sacnun, Basualdo, Rodríguez Machado, Ianni, Rodas, Giménez, Blanco, Mirkin, Rodríguez Poggi, Almirón, Tapia, Mirabella, Olalla, Lovera, Crexell, González (M.), Pais, Snoppek, Recalde, Leavy, Tagliaferri, Pilatti Vergara, De Angeli, González (G.), Vega, Taiana, Castillo, Giacoppo, Doñate, Cobos, Braillard Pocard, Luenzo, Lousteau, Bullrich, Caserio, Weretilneck, Romero, Elías de Perez, Petcoff Naidenoff, Fernández Sagasti y Mayans.)

7. **Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (O.D. N° 719/20.)** (Pág. 179.)

(**Oradores:** Neder, Uñac y Fiad.)

8. **Apéndice.**

I. **Convocatoria a sesión especial. (Nota de senadores y decreto de la Presidencia del Honorable Senado.)** (Pág. 187.)

II. **Actas de votación.** (Pág. 190.)

III. **Asuntos entrados. (Lista.)** (Pág. 192.)

IV. **Inserciones.** (Pág. 193.)

(**Solicitantes:** 1. **Neder** (O.D. N° 716/20), 2. **Blanco** (O.D. N° 716/20), 3. **Costa** (O.D. N° 716/20), 4. **Tapia** (O.D. N° 716/20), 5. **Tapia** (O.D. N° 719/20), 6. **De Angeli** (O.D. N° 719/20), 7. **Basualdo** (O.D. N° 719/20), 8. **Montenegro** (O.D. N° 716/20), 9. **Castillo** (O.D. N° 716/20), 10. **Ledesma Abdala** (O.D. N° 719/20) y 11. **Ledesma Abdala** (O.D. N° 716/20.))

—A las 16:08 del martes 29 de diciembre de 2020:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muy buenas tardes a todos y a todas. Con la presencia de 67 señores senadores y señoras senadoras, se da comienzo a la sesión especial del día de la fecha.

* Se puede volver al Índice desde cualquier parte del Diario de Sesiones digital haciendo clic en los **títulos**, en los **encabezados** o en los **pies de página**.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito a la senadora Nancy González a izar el pabellón nacional y a mantenernos de pie mientras entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Muchas gracias.

-Puestos de pie los presentes, así se hace. (*Aplausos.*)

2

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorporan al Diario de Sesiones todas las notas presentadas por senadores y senadoras solicitando esta sesión especial y el respectivo decreto de esta Presidencia, N° 105/2020.

-Los documentos respectivos figuran en el Apéndice. (Pág. 187.)

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187, se da ingreso a todos los asuntos vía intranet, si hay asentimiento de los señores senadores y senadoras.

-La lista de asuntos entrados figura en el Apéndice. (Pág. 192.)

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay asentimiento. Resultan aprobados los asuntos entrados.

4

**LICENCIA SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ALPEROVICH
(S.-3.039/20)**

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde, ahora, votar la extensión de la licencia del senador José Alperovich, a mano alzada.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por unanimidad, resulta afirmativa.

-La sanción se publica en la web del Senado, como "Texto Definitivo", con acceso por el número de expediente.

5

MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por Secretaría, se va a dar lectura al mensaje solicitando prestar acuerdo a los efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de este Senado.

Con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención, resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.

-El resultado de la votación surge del Acta N° 1. (Pág. 190.)

-La sanción se publica en la web del Senado, como "Texto Definitivo", con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Seguimos con la sesión.

7

**LEY NACIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA**

(O.D. N° 719/20)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde la consideración del orden del día de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 719/20: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea la "Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia".

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde la aprobación de la lista de oradores.

Vamos a dar lectura a la lista de oradores.

Sr. Secretario (Fuentes).- Neder, Uñac y Fiad.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, aprobado.

Tiene la palabra el senador Neder.

Sr. Neder.- Gracias, señora presidenta.

Vamos a tratar de ser lo más breve posible, dado lo avanzado de la hora.

Ante todo, lo primero que quiero remarcar respecto de este proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -también conocido como el programa de los Mil Días- es que se trata de otra iniciativa impulsada por un Estado presente y solidario, que mueve y acompaña el desarrollo de su capital máspreciado: las personas.

En estos primeros mil días se da la mayor velocidad de crecimiento que en cualquier otra etapa de la vida. En consecuencia, el programa constituye una estrategia sanitaria que abarca un período en el cual si se realizan intervenciones, su impacto se refleja tanto en el presente como a futuro.

La importancia de una buena alimentación para el desarrollo cognitivo favorece todos aquellos procesos relacionados con el pensamiento, entre los cuales se incluye la memoria, el razonamiento, el desarrollo del lenguaje, la toma de decisiones. Durante los primeros años de vida, esto va a determinar el aprendizaje, la capacidad de procesar mejor y de entender todo lo que sucede en el entorno de un niño. Es decir, el niño escucha, entiende y ve, lo cual es clave para lograr el mejor rendimiento en edades posteriores.

En este contexto de pandemia, si algo ha quedado claro y demostrado es que la salud debe ser siempre un derecho esencial, presidenta. Esa premisa es la que impulsa este gobierno nacional y popular, presidido por Alberto Fernández y por usted, vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quienes desde el primer día de su mandato recuperaron, para cuidar a los argentinos y a las argentinas, el Ministerio de Salud, que había sido bajado en el gobierno de Mauricio Macri, simplemente a una secretaría, con todo lo que ello implica.

Por eso también surge este programa, que genera efectos benéficos directos sobre las personas y los proyecta sobre las futuras generaciones, dado que la inequidad trae consecuencias irremediables para muchos niños y niñas que atraviesan esas edades.

Claramente, estamos en presencia de una iniciativa que se inscribe dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objetivo de que las políticas públicas estén en línea con los estándares que se plantean.

La población objetivo del programa de los Mil Días es alrededor de 2.100.000 niños y niñas menores de 3 años. Y las personas gestantes son aproximadamente 690.000 por año, muchas de ellas en situaciones de pobreza. Estos datos grafican una incidencia relevante en los hogares humildes de nuestro país.

Por ello, la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas: no intervenciones aisladas, sino integrales, gestionadas intersectorialmente, como para desarrollar políticas activas que, en conjunto, den un resultado efectivo con relación a lo que estamos tratando.

Este proyecto jerarquiza y amplía las agendas de la primera infancia: se establece el pago de una asignación universal por cuidado de la salud integral, que se cobrará una vez al año por cada niño o niña menor de 3 años que cumpla con el plan vacunatorio obligatorio y los programas sanitarios nacionales. Además, se amplía de 6 a 9 meses la asignación por embarazo para protección social; se elimina el concepto de antigüedad para la asignación por adopción y nacimiento, a la vez que se amplía su pago a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, cosa no menor.

En cuanto a las personas gestantes que cursen embarazos de alto riesgo –por ejemplo, las que padezcan trombofilia–, las autoridades de aplicación deberán procurar el acceso a los estudios de diagnóstico gratuitos y a los tratamientos establecidos para tal condición, con enfoque en la reducción del riesgo, obviamente, que es de lo que se trata.

El programa prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia, coordinando y ampliando los programas ya existentes.

Se dispone la creación del sistema de alerta temprana de nacimientos y el certificado de hechos vitales, con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. En este punto, en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, el personal de salud, obstétrico o agente sanitario, que esté autorizado a tal efecto y hubiera atendido un parto fuera de esos centros asistenciales deberá informar al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días de haber ocurrido.

También se creará en el ámbito del Ministerio de Salud una unidad de coordinación administrativa. Dicha unidad tendrá como función el abordaje y la coordinación de acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley, ocupándose además de diseñar los protocolos de actuación más todo lo relativo al plan de capacitación.

Se suma a todo lo mencionado una publicación –en diseño y formato accesible, con guía de cuidados integrales de la salud– que contenga información propia de cada etapa en el curso vital, más la incorporación de una línea gratuita de atención telefónica.

Se procederá a la unificación de registros y base de datos entre los organismos intervinientes, junto con la elaboración de un informe anual con el estado de avances e indicadores, que deberá ser presentado ante el Honorable Congreso de la Nación.

Señora presidenta: con este proyecto se resuelve, para su cumplimiento, la coordinación entre las áreas estatales, la simplificación de trámites para el acceso y el diseño de políticas públicas que brinden una asistencia apropiada a las familias, con monitoreo y seguimiento en cada uno de los casos que aquí se plantean.

Este programa de los Mil Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos, porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior profundo, con una mirada federal, como todas las acciones que este gobierno nacional y popular viene marcando en el sentido de determinar mejor salud para todos y todas las argentinas. Al respecto, todos los esfuerzos son válidos y aportan en ese sentido.

Permítame citar un ejemplo, en este caso de mi provincia, Santiago del Estero, donde la gestión del gobernador Gerardo Zamora lleva adelante programas denominados “Mis primeros 1.700 días”, aportando un suplemento nutricional consistente en bebida láctea, cereales, postres, que están destinados a mujeres embarazadas y en período de lactancia, y a niños hasta los cuatro años de edad que se encuentran en situaciones vulnerables, trabajando desde el Ministerio de Salud en forma coordinada con los municipios, con las comisiones municipales, con las organizaciones no gubernamentales, para llevar adelante este proceso de integración y de cuidado de la salud y del crecimiento de los niños en estado vulnerable.

Por esto, vale recordar, en ese mismo sentido, a quien fue el primer ministro de Salud de la Nación Argentina –en el gobierno del general Perón–, a ese comprovinciano nuestro, el doctor Ramón Carrillo, que decía: “No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad social. El derecho a la salud se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional”.

Mil Días es un programa del Estado que procura generar igualdad de oportunidades desde la base misma de la vida. De esa vida que no debe discontinuarse desde la gestación de la madre.

Todavía falta mucho por hacer –seguramente– para alcanzar la justicia social que tanto pregonamos los peronistas y por la que tanto luchamos para

llevarla a cada hogar humilde de nuestra querida República Argentina. Es por eso que esta etapa y esta ley avanzan en ese sentido.

Presidenta: por todo lo expuesto, y para ser lo más breve posible, esta es una ley que avanza en el sentido de recuperar derechos esenciales para la vida. Por ello, les pido a mis pares que la conviertan en ley, acompañando este proyecto.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el senador Uñac.

Sr. Uñac.- Gracias, señora presidenta.

Seré muy breve, porque ha sido un día largo y muy intenso. Pero quería manifestarle la satisfacción por la presentación de este proyecto que, claramente, no tiene color ni, seguramente, gente en las calles. Pero es necesario manifestar la importancia que tiene, pues involucra el fortalecimiento del capital humano y amplía y garantiza derechos para los más vulnerables, que son los niños, las niñas y las mujeres embarazadas.

Puedo dar fe del éxito de este programa a futuro, porque en mi provincia, en el año 2016, siendo diputado provincial, presentamos un proyecto que llamamos “Mis Primeros Mil Días”. Ese proyecto lo presenté nuevamente en el Senado, en el año 2018, y reproduje la presentación a principios de este año. Por la importancia que tuvo en mi provincia, y por los resultados positivos, a principios de este año se amplió, se lo llamó “Los Dos Mil Días” y abarca desde el embarazo hasta el inicio de la edad escolar.

Este es un proyecto que ha sido informado y, además, promocionado por Unicef, que lo llamó “Los primeros mil días de amor”. Por ello, creemos –estoy convencido– que empodera. La primera infancia importa, y esto es exactamente lo que nos inspira. Así que pido a mis pares que acompañen este proyecto.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el último orador, que va a ser el senador Fiad.

Sr. Fiad.- Gracias, presidenta.

Ya me había expresado en el plenario de comisiones. Y sobre eso quiero hacer alguna referencia, porque también se había pedido la ampliación del giro de este proyecto hacia la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Creo que era una de las comisiones pertinentes, por lo que trata el proyecto. Con lo cual, también vemos que se ha visto truncada la posibilidad allí de poder dársele el giro que corresponde a la Comisión de Población.

La verdad es que las pocas innovaciones que trae el proyecto ya las refirió el senador Neder. Luego, el resto fue difundido como si fuera una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños y niñas de hasta tres años. Espero que no quede en un compendio de buenos propósitos, ya que está expresado en tiempo futuro, sin crear verdaderas obligaciones para el Estado, sin plazos ni especificaciones.

La verdad es que tenemos ya una cantidad de derechos y de cuestiones estructurales que son urgentes y prioritarias para resolver respecto de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Y nos llega este proyecto que dice que la autoridad de aplicación promoverá la respuesta.

Tenemos muchas leyes que se superponen, muchos decretos que se superponen; espero que este proyecto pueda articularlos. Y se va a tener un gran trabajo en la reglamentación, ya que hay que compilar muchas de las leyes y decretos que ya existen.

Por eso, creo que es bastante declarativo. Ni siquiera se ha dicho de dónde se van a sacar los fondos para poder atender estas acciones. O sea que no tiene un financiamiento previsto.

Pero adelanto que vamos a votar en forma positiva este proyecto para no retrasar las poquísimas medidas que establece. Pero entiendo que la reglamentación -insisto- va a tener un arduo trabajo con este proyecto, porque va tener que hacer muchos relevamientos, va a tener que generar muchas articulaciones para poder homogeneizar y darle cuerpo y acción a esta iniciativa.

Por eso, no nos sentimos tan orgullosos de este proyecto, de este texto, porque es declarativo. Importante sí, pero carente absolutamente de la eficacia y operatividad que necesitan ya las mujeres y los niños vulnerables en la Argentina.

Es un punto de partida. Sepamos que el día después de esta ley no hay soluciones, sino que es el inicio de un largo y complejo proceso de ordenamiento y de reglamentación que va a tener esta ley.

Por esa razón, vamos a darle curso y vamos a votar positivamente.

Pido permiso para insertar el resto de mi discurso, señora presidente.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.

Corresponde, ahora, votar la autorización para inserciones y abstenciones.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se encuentra autorizado.

Propongo que se vote en general y en particular por medios electrónicos, en una sola votación.

-Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Está aprobado.

Se lanzó la votación.

-Se practica la votación por medios electrónicos.

-Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se cerró la votación.

-Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por Secretaría se dará lectura al sentido del voto de cada senador y senadora.

Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.

Alperovich: ausente.

Basualdo: afirmativo.

Blanco: afirmativo.

Blas: afirmativo.

Braillard Pocard: afirmativo.

Bullrich: afirmativo.

Caserio: afirmativo.

Castillo: afirmativo.

Catalfamo: afirmativo.

Closs: afirmativo.

Cobos: afirmativo.

Senador Costa: ¿su voto, por favor?

Sr. Costa.- Afirmativo, señor secretario.

Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.

Senador Costa: afirmativo.

Senadora Crexell: afirmativo.

De Angeli: afirmativo.

Doñate: afirmativo.

Senadora Durango: ¿su voto, por favor?

Sra. Durango.- Afirmativo, presidenta.

Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Durango: afirmativo.

Senadora Duré: ¿su voto, por favor?

Sra. Duré.- Afirmativo, señor secretario.

Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Duré: afirmativo. Gracias, senadora.

Elías de Perez: afirmativo.

Espínola: afirmativo.

Fernández Sagasti: afirmativo.

Fiad: afirmativo.

García Larraburu: afirmativo.

Giacoppo: afirmativo.

Giménez: afirmativo.

Gladys González: afirmativo.

María Teresa González: afirmativo.

Nancy González: afirmativo.

Ianni: afirmativo.

Kueider: afirmativo.

Leavy: afirmativo.

Senadora Ledesma Abdala de Zamora: ¿su voto?

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senadora Ledesma?

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.

Senadora López Valverde: afirmativo.

Senador Lousteau: afirmativo.

Senador Lovera: afirmativo.

Senador Luenzo: afirmativo.

Senador Marino: ausente.

Senador Ernesto Martínez: afirmativo.

Senador Julio Martínez: afirmativo.

Senador Mayans: afirmativo.

Senador Menem: ausente.

Senador Mera: afirmativo.

Senador Mirabella: ¿su voto?

Sr. Mirabella.- Afirmativo, secretario.

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Mirabella: afirmativo. Gracias.

Senadora Mirkin: afirmativo.

Senador Montenegro: afirmativo.

Senador Neder: afirmativo.

Senadora Olalla: ¿su voto?

Sra. Olalla.- Afirmativo.

Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Olalla: afirmativo.

Senador Pais: afirmativo.

Parrilli: afirmativo.

Naidenoff: afirmativo.

Pilatti Vergara: afirmativo.

Poggi: afirmativo.

Recalde: afirmativo.

Reutemann: afirmativo.

Rodas: afirmativo.

Rodríguez, Matías: afirmativo.

Rodríguez Machado: afirmativo.

Rodríguez Saá: ausente

Romero: ausente.

Sacnun: afirmativo.

Sapag: afirmativo.

Senador Schiavoni: ¿su voto?

Sr. Schiavoni.- Afirmativo.

Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.

Senador Schiavoni: afirmativo.

Senador Snopek: afirmativo.

Solari Quintana: afirmativo.

Tagliaferri: afirmativo.

Senador Taiana: ¿su voto?

Sr. Taiana.- Afirmativo, señor secretario.

Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.

Senador Taiana: afirmativo.

Tapia: afirmativo.

Uñac: afirmativo.

Senadora Vega: ausente

Senadora Verasay: ¿su voto?

-Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Verasay: afirmativo.

Senador Weretilneck: afirmativo.

Senador Zimmermann: afirmativo.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Queda aprobado por unanimidad. Se comunica al Poder Ejecutivo.

-El resultado de la votación surge del Acta N°2. (Pág. 191.)

-La sanción se publica en la web del Senado, como "Texto Definitivo", con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bueno, muchas gracias.

No habiendo más temas que tratar, se da por levantada y finalizada la sesión del día de la fecha.

-Son las 4:36 del miércoles 30 de diciembre de 2020.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

8

APÉNDICE

I


CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

NOTA DE SENADORES

"2020 – Año del General Manuel Belgrano"

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2020.

Sra. Presidenta del
Honorable Senado de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S _____ / _____ D

SENADO DE LA NACION		
DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS		
	<div>-23 DIC 2020</div>	
S	3038/20	20:10
EXP..... Nº..... Hora.....		

Tenemos el agrado de dirigirnos a la señora Presidenta de la H. Cámara, a fin de solicitar se convoque a Sesión Pública Especial para el próximo martes 29 de diciembre del corriente año, conforme al artículo 19 del Reglamento del H. Senado de la Nación a fin de dar tratamiento a los siguientes temas:

- Cumplimentar con el artículo 22 del Reglamento del H. Senado para dar cuenta de los Mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de acuerdos.
- Orden del Día 716/20: Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto (CD 53/20).
- Orden del Día 719/20: Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea la "ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia" (CD 54/20).

Saludamos muy atentamente a la Señora Presidenta del H. Senado de la Nación.

José Miguel Ángel Mayans
Presidente de Bloque
Bloque Fte. De Todos

Anabel Fernández Sagasti
Vicepresidenta de Bloque
Bloque Fte. De Todos

Mariano Recalde
Senador de la Nación
Bloque Fte. De Todos

Jorge Enrique Taiana
Senador de la Nación
Bloque Fte. De Todos

María Teresa González
Senadora de la Nación
Bloque Fte. De Todos

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO

*Presidencia
del
Senado de la Nación*

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

DPP- 105 /20

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2020.

VISTO:

La solicitud presentada por los Señores Senadores y Señoras Senadoras de convocar a *Sesión Pública Especial*; y

CONSIDERANDO:

Que, por medio de la Ley 27.541, se estableció la emergencia en materia sanitaria, siendo la misma ampliada con motivo de la pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus (COVID-19), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del corriente por el plazo de UN (1) año;

Que, mediante RSA-487/20 se dispuso la modalidad de Trabajo Conectado Remoto (TCR), se dispensó de la asistencia al personal y se determinaron guardias mínimas para garantizar el normal funcionamiento del H. Senado de la Nación;

Que, por el DP-8/20, la Presidencia del H. Senado de la Nación encomendó la realización de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional por el plazo de 60 días ad referendum del H. Senado de la Nación, siendo refrendado mediante DR-15/20;

Que, mediante los DP-11/20, 12/20, 14/20 y 18/20, se prorrogó la vigencia de la realización de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, ad referendum del H. Senado de la Nación. Refrendados por el H. Senado de la Nación mediante las DR-49/20, 50/20, 148/20 y 243/20;

Que, dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia, y



*Presidencia
del
Senado de la Nación*

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

DPP- 105 /20

POR ELLO:

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA NACION,

D E C R E T A:

Artículo 1°- Por Secretaría cítese a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, a *Sesión Pública Especial*, para el día martes 29 de diciembre del corriente, a las 16.00 horas, con el objeto de tratar el siguiente temario:

- Cumplimentar con el artículo 22 del Reglamento del H. Senado para dar cuenta de los Mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de acuerdos.
- **Orden del Día 716/20:** Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. (C.D.-53/20).
- **Orden del Día 719/20:** Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea la "ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia". (CD-54/20)

Artículo 2° - Dese cuenta oportunamente al H. Senado.

Artículo 3° - Comuníquese.



ACTA N° 2

OD- 719/20

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR



Tipo Quorum: MAS 1/2 MC
 Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Fecha: 29/12/2020

Acta: 2

Miembros del cuerpo: 72 Votación: NOMINAL

Presidente: FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

Presentes: 65 Ausentes: 7 AMN: 33

Afirmativos: 65
 Negativos: 0
 Abstenciones: 0
 Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto		Nombre Completo	Voto	
1. Almirón, Ana Claudia	SI		37. Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
2. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		38. Martínez, Ernesto Félix	SI	
3. Basualdo, Roberto Gustavo	SI		39. Martínez, Julio	SI	
4. Blanco, Pablo Daniel	SI		40. Mayans, José Miguel Ángel	SI	
5. Blas, Ines I.	SI		41. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
6. Brailard Pocard, Pedro	SI		42. Mera, Dalmacio	SI	
7. Bullrich, Esteban	SI		43. Mirabella, Roberto Mario	SI	
8. Caserio, Carlos Alberto	SI		44. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	
9. Castillo, Oscar Anibal	SI		45. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	
10. Calfamio, Eugenia	SI		46. Neder, José Emilio	SI	
11. Closs, Maurice	SI		47. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	
12. Cobos, Julio	SI		48. Pais, Juan Mario	SI	
13. Costa, Eduardo	SI		49. Parrilli, Oscar Isidro	SI	
14. Crexell, Carmen Lucila	SI		50. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	
15. De Angeli, Alfredo Luis	SI		51. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	
16. Doñate, Claudio Martín	SI		52. Poggi, Claudio	SI	
17. Durango, Norma Haydee	SI		53. Recalde, Mariano	SI	
18. Duré, María Eugenia	SI		54. Reutemann, Carlos Alberto	SI	
19. Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI		55. Rodas, Antonio	SI	
20. Espinola, Carlos Mauricio	SI		56. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	
21. Fernández Sagasti, Anabel	SI		57. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
22. Fiad, Mario R.	SI		58. Rodríguez, Matias David	SI	
23. García Larraburu, Silvina Marcela	SI		59. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
24. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI		60. Sacnun, María de los Angeles	SI	
25. Gimenez, Nora del Valle	SI		61. Sapag, Silvia Estela	SI	
26. González, Gladys	SI		62. Schiavoni, Humberto	SI	
27. González, María Teresa Margarita	SI		63. Snopek, Guillermo	SI	
28. González, Nancy Susana	SI		64. Solari Quintana, Magdalena	SI	
29. Ianni, Ana María	SI		65. Tagliaferri, Guadalupe	SI	
30. Kueider, Edgardo Dario	SI		66. Taiana, Jorge Enrique	SI	
31. Leavy, Sergio Napoleón	SI		67. Tapia, María Bélen	SI	
32. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE		68. Uñac, José Rubén.	SI	
33. López Valverde, Cristina	SI		69. Vega, María Clara Del Valle	AUSENTE	
34. Lousteau, Martín	SI		70. Verasay, Pamela	SI	
35. Lovera, Daniel Anibal	SI		71. Weretlineck, Alberto	SI	
36. Luenzo, Alfredo Héctor	SI		72. Zimmermann, Victor	SI	

- 719 De "Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia". SALUD
P.L.; C.D. 54/20 PRESUP. Y HAC.

IV

INSERCIONES

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

En cuanto a este proyecto, lo primero que quiero expresar es que la vida humana comienza con la fecundación. Esta conclusión es una certeza científica, avalada por la Academia de Medicina. No se trata de una hipótesis, sino que, repito, nos estamos refiriendo a una certeza.

Esto es así porque en el maravilloso y sublime momento de la fecundación, la unión del pronúcleo femenino y masculino da lugar a un ser con una individualidad cromosómica y con la carga genética de sus progenitores. Si no se interrumpe esa evolución, se producirá el nacimiento. De nuevo: hablamos de una certeza.

Entonces, podemos inferir, con plena seguridad, que desde la biología el niño por nacer es, científicamente, un ser humano, cuya existencia comienza a partir de la concepción. En consecuencia, eliminar un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano.

Por lo tanto, cuando en este caso se habla de la autonomía de la mujer, muy respetable por cierto, no podemos dejar de contemplar una situación fundamental: también hay que tener en cuenta que hay otra presencia, que ya existe otro ser. Y esto es así porque el niño por nacer ya existe a partir de la concepción, lo cual está avalado por nuestro Código Civil. Este es el enfoque legal y constitucional del tema que estamos tratando, porque el Código Civil, -en su artículo 19, en cuanto a la existencia de la persona humana-, dice que esta comienza con la concepción.

Por eso marco la diferencia con este proyecto que trata de establecer que la vida comienza en la semana número 12, cuando el Código Civil sigue manteniendo que es a partir de la concepción. Al respecto, no es compatible modificar una ley penal dejando vigente ese Código Civil, es algo que no observa una armonía necesaria e imprescindible, en cuanto al diseño de nuestro sistema jurídico.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y que estará protegido por la ley, en general, a partir de la concepción. En cuanto a la Convención de los Derechos del Niño establece, claramente, que la vida del niño comienza y se protege a partir de la concepción.

Por lo expuesto y, definitivamente, para el sistema legal y constitucional argentino la vida comienza con la concepción, y tiene que ser respetada.

El futuro de una sociedad son los hijos. Esta afirmación tiene una envergadura social enorme, máxime en un país como Argentina que se ha caracterizado siempre por ser una Nación abierta e inclusiva, que refleja en estos valores parte sustancial de nuestra idiosincrasia.

Con respecto al problema de salud pública que se plantea, mi opinión es que es posible reducir la mortalidad materna sin tener que recurrir a la legalización del aborto. Ampliando el marco de fundamentación, considero que ello se logrará fortaleciendo el acceso a servicios de salud calificados para todas las embarazadas durante el embarazo, el parto y el puerperio; a la educación, a la información y a la prevención para el control de la propia fertilidad.

También quiero hacer una mención a la posición del papa Francisco, quien afirmó que la legalización del aborto conllevaría una violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta que es un problema humano previo a cualquier opción religiosa.

En el espíritu del magisterio del papa Francisco, en su encíclica *Fratelli tutti*, nos recuerda que solo si la persona es considerada un valor primario se podrá transitar con decisión y esperanza el camino hacia un encuentro, tendiendo puentes y curando las heridas nacidas de las injusticias y desigualdades que aquejan a los más débiles y excluidos.

Por su parte la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, exhortó a defender el valor y el respeto por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.

Cada vida es única e irrepetible, y no se puede descartar. Aun si fuera legal, no sería algo justo. Por eso, hay que avanzar en una agenda que acompañe y apoye, cuidando y dignificando todas las vidas. Ese es el modelo a impulsar. No hay que sobreponer los derechos de unos por encima de los de otros.

Para finalizar, señora presidenta: valoro las diferentes posiciones de cada una de las senadoras y de los senadores, porque soy un convencido de que el disenso respetuoso es una virtud de la democracia. Este proyecto trata de algo muy delicado, cuyas consecuencias no son corregibles, sino irreversibles; así que, por lo tanto, voy a proceder desde mi convicción cristiana y humanista, aplicando mi objeción de conciencia al tema que estamos abordando. Mi voto es en contra.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BLANCO

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

Tenemos ante nosotros para el debate un proyecto que, a mi criterio, convencido de la transversalidad de sus alcances, debiera ser abordado más allá de las convicciones morales, religiosas, políticas, ideológicas y partidarias. No porque sean escindibles de cada uno de nosotros, sino para intentar despojarlo de descalificaciones y agravios a priori que son innecesarios y superfluos.

Desde el Congreso de la Nación, y especialmente en esta Cámara que alberga a los representantes de las provincias de nuestro país, lo que me parece irrenunciable es concentrarnos en el enfoque jurídico del tema y sus implicancias para cada una de las jurisdicciones que representamos.

Según el objeto delineado en el artículo 1° del proyecto, que es el de regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, debemos reparar en que nuestro sistema jurídico se estructura sobre un principio fundamental tanto en el orden interno como convencional que es el de la existencia de la vida humana desde la concepción.

Es por ello que resulta falsa la pretensión de dar cumplimiento a compromisos asumidos por el Estado argentino cuando en realidad es universalmente aceptado que una recomendación no obliga, sólo sugiere, propone. Y ese es el alcance de las recomendaciones y observaciones de los Comités Internacionales.

La tan pregonada recomendación del Comité de los Derechos del Niño encuentra su improcedencia en la Declaración Interpretativa que nuestro país efectuó al aprobar y ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño mediante la ley 23.849: con ello, sin modificar el tenor de la Convención, nuestro país dejó sentado que la interpretación para nuestro orden jurídico constitucional se enmarca en la consideración del niño como tal desde la concepción.

Mal podría prevalecer entonces una recomendación de un comité por sobre la clara obligación impuesta al Estado por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional de proteger al niño desde el embarazo. Y la propia Declaración Interpretativa tiene jerarquía constitucional por cuanto establece las condiciones de su vigencia tal como lo exige el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.

No puedo dejar de mencionar que en el artículo 3° del proyecto se refiere al marco normativo constitucional mencionando algunos de los Tratados del artículo 75 inciso 22 de la Constitución, pero se omite en todo el proyecto la alusión al artículo 75 inciso 23 de la Constitución, como si con dicha omisión quedara desvirtuado o derogado su contenido.

Claramente ningún tratado obliga ni podría obligar a la Argentina a legalizar el derecho al aborto sin que se violente el orden constitucional; ni aun cuando se pretenda exponerlo como un derecho de la mujer. Nuestro país se ha obligado concretamente en sentido contrario a fin de que la ratificación de la Convención armonizara con el Código Civil de entonces y el de ahora con respecto a la protección de las personas por nacer, por lo cual persistir en esta iniciativa sólo garantiza que no se superen los estándares mínimos de convencionalidad y legalidad necesarios.

Formar parte del sistema internacional de protección de los derechos humanos no implica perder soberanía; no perdemos nuestra autonomía ni deroga nuestro orden constitucional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece el principio de la buena fe para la interpretación de los mismos, y sostener que el derecho internacional nos exige reconocer el derecho al aborto no constituye una interpretación de buena fe sino más bien una arbitrariedad.

Yendo al orden legal, nuestro Código Civil define el embarazo en los artículos 19 y 20 (en los que se establece que la existencia de la persona comienza desde la concepción y la definición de embarazo). Esto nos pone frente a un bloque de legalidad y convencionalidad conformado por la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño con su Declaración Interpretativa y el Código Civil que establece la existencia de vida y su protección desde la concepción, frente a una ley civil con contenido penal y modificaciones al Código Penal que a partir de este proyecto van a sostener lo contrario, sin posibilidad lógica, filosófica ni jurídica de coexistencia armónica.

Lo que hace este proyecto es no sólo negarle la condición de persona al niño por nacer, sino también privarlo del derecho a la vida con total desaprensión.

Es también pacíficamente aceptado que no existen en nuestro ordenamiento derechos absolutos. Ni aún en el caso de los más esenciales, ya que puesto en crisis con otro derecho habrá que ponderar cuál tiene mayor preponderancia en el caso concreto y eventualmente podrá haber una excepción a los alcances de la protección a algún derecho. Pero nunca la eliminación o desconocimiento de derecho.

Sin embargo, lo que este proyecto ofrece es la ausencia de toda ponderación: nunca ha sido tenido en consideración el derecho del niño por nacer. Sólo se establece el derecho subjetivo y absoluto de la mujer ya no a disponer de su propio cuerpo sino a disponer a su antojo de la vida de otro ser, por el cual el Estado parece haber abdicado consciente e inexplicablemente del deber de garantía que la constitución le impone. Indudablemente, el hecho de que el niño por nacer se esté gestando en su cuerpo no le confiere a la mujer el derecho a decidir sobre su existencia, supervivencia, dignidad y viabilidad. Sin embargo, contrariando todos estos principios indiscutidos, el estado -de prosperar este proyecto- delega en la mujer gestante la decisión sobre la vida del niño, sobre su continuidad o no.

Nótese que este proyecto le confiere a la mujer un derecho más amplio y más absoluto que el que tiene sobre su propio cuerpo, a poco que se aborde el tema a la luz del ordenamiento normativo integral. En nuestro régimen del Código Civil se exige para la toma de decisiones en materia de salud la competencia decisoria como regla (y no capacidad jurídica, aplicable sólo a supuestos de excepción tales como el otorgamiento de directivas anticipadas, artículo 60). Dicha aptitud o competencia para recibir información y tomar decisiones sobre el propio cuerpo se enmarca en el concepto de autonomía progresiva, arraigado ya en las Convenciones de Derechos Humanos que forman parte del bloque constitucional del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.

Consecuencia de ello es que se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos, atribuyéndoseles mayor poder de decisión según su edad y grado de madurez. En este sentido, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que los menores entre trece (13) y dieciséis años (16) años tienen aptitud para decidir sobre tratamientos médicos no invasivos, ni especialmente riesgosos; con la asistencia de sus progenitores cuando los tratamientos presentaren tales condiciones. A partir de los dieciséis años de edad, se consideran adultos para las decisiones atinentes al cuidado de

su propio cuerpo. De todos modos, estas presunciones operan ponderando la complejidad de las cuestiones de salud que pueden estar involucradas y las diferencias en el grado de madurez física y psíquica que suelen presentar los adolescentes de una misma edad.

Entonces no es menor enfocarse en la distinción entre prácticas o tratamientos médicos invasivos o riesgosos, y aquellos que no lo son. En las jornadas de plenario de las comisiones que he presenciado se ha podido escuchar a más de un expositor del ámbito médico y científico afirmando que el aborto es una práctica invasiva y no desprovista de riesgos, tanto para mayores como para menores de edad.

Pues con este marco legal que estamos tratando se concede plena capacidad a los mayores de 16 años para ejercer el derecho a la supresión del embarazo, no a decidir sobre su cuerpo sino sobre la continuidad de la vida del ser en gestación. De nuevo, bajo la falacia de pretender enmarcarlo en el código civil, hay que enfatizar que el código establece dicha capacidad para adoptar decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (artículo 26). En ningún momento dicha capacidad otorgada a los adolescentes (ni la de los adultos) tiene el poder para desvirtuar uno de los pilares sobre los que se cimienta nuestro ordenamiento civil, que son los derechos personalísimos. En especial, el primero y esencial de inviolabilidad de la persona humana reconocido, en el artículo 51, al establecer que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

Aquí, es decir en este proyecto que estamos tratando, se echa por tierra todo reconocimiento de dignidad, existencia, y derecho del niño por nacer.

Incluso más de un ordenamiento local podría verse como contradictorio al exigirse una mayoría de edad (18 o 21 años) por encima de la mencionada para la realización de tatuajes o piercing, siendo prácticas que obviamente sólo afectan su propio cuerpo. A menos que, al igual que en el nivel convencional, tengamos una visión armónica e integral de acuerdo a la buena fe, de modo que consideremos entonces que dado que el código civil es una norma superior ha quedado modificada de hecho la normativa provincial.

Estamos entonces ante un deliberado desconocimiento del carácter invasivo del aborto, en flagrante contradicción con los lineamientos de la ley de los derechos del paciente y consentimiento informado, y de los principios más elementales de derechos humanos y personalísimos de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es una falacia la absurda disputa entre derecho a la salud y derecho a la vida. Aquí nadie sopesó nada. Parece que no se pudiera sopesar situaciones: es todo o nada, será ley o no será nada, es verde o es celeste. La desproporción, absolutez, ilimitación e irrazonabilidad conducen a esta irracionalidad.

Es clarísima la inconstitucionalidad y carencia de apoyatura jurídica de esta iniciativa. No existe el más mínimo contrapeso entre derechos en crisis; no existe tensión entre derechos. Sólo se consagran derechos absolutos para las personas gestantes en espejo de un laberinto de obligaciones para los profesionales de la salud de modo que, tal como define la Real Academia Española al término laberinto, -lugar formado artificialmente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida-, sea cual fuere el temperamento que se adopte, podría

reprochársele alguna conducta por acción u omisión. La decisión política pareciera ser que hay que criminalizar a los médicos ya que: o cumple con las exigencias de esta ley, o con la del ejercicio de la medicina y todo el corpus sobre materia de salud vigente en nuestro país, en concordancia con el juramento que se le exige para el ejercicio de su profesión.

En este marco de ilimitada y magnificada autonomía de la voluntad de la mujer viene el estado a través del Poder Ejecutivo a procurar que este Parlamento, esta casa que es política pero antes que política es la casa de las leyes, preste su conformidad y sea parte de la renuncia consciente a los deberes que la Constitución le impone en desmedro de la protección de la vida desde la concepción y del niño por nacer. La obligación del estado es velar por todos, aún por el niño por nacer. Con este proyecto el estado decidió a priori quién tiene derecho y quién no; quién tiene derecho de jerarquía ya no superior sino absoluta: la mujer, en desmedro del niño por nacer.

Ni siquiera se elevó la voz de la Defensora del Niño para oponer algún reparo, algún límite, algún reclamo por las vidas que no tienen protección. Alguien que recuerde que en alguna parte de nuestro ordenamiento jurídico existe un principio fundamental de tutela que es el del interés superior del niño. Nadie. Nadie desde el Estado se ocupará de ellos, total no se ven, no se escuchan, no gritan, no se manifiestan, no votan. Ni siquiera se animan a llamar a las cosas por su nombre: recurren a amañados sofismas y disfrazan con ropajes semánticos denominando “interrupción voluntaria de embarazo” al aborto por libre decisión a demanda. Es absurdo que contrapongan como argumento los 1000 días, cuando es altamente improbable que se hagan efectivos si se pretende dar cumplimiento a esta ley.

Otro gran olvidado del proyecto es el padre del niño por nacer, quien no solo es parte responsable de la concepción, sino que sin duda tiene obligaciones pero también derecho sobre la continuidad de la vida del niño.

No nos votaron para eso, para tamaña crueldad, sin límites. Al menos no me votaron a mí para eso. Yo di mi palabra en sentido contrario, es decir a favor de la vida y eso es lo que vine a hacer y voy a hacer.

A modo de síntesis, para no reiterar fundamentos que han abordado los colegas preopinantes, fundo mi rechazo a este proyecto complejo, que nos divide, de altísimo impacto en nuestros representados, en que se basa en premisas falsas violentando nuestro orden jurídico interno y convencional, por no ajustarse a los estándares mínimos requeridos de convencionalidad, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, no contradicción, incongruencia, desconocimiento del principio de dignidad humana (que es igual e inviolable para todos) y de protección a la vida desde la concepción. No existe autonomía ni derecho que legitime dar muerte a otra persona.

Para finalizar quisiera agregar algunas consideraciones que están en franca colisión con el marco normativo fueguino:

Sin dudas este proyecto plantea un cuestionamiento adicional ya que vulnera la Constitución de 13 provincias, entre ellas la de mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En efecto: el artículo 21 del proyecto establece que “Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. Y como ya se ha fundamentado durante

las jornadas de plenario, las competencias en materia de salud son concurrentes entre el estado federal y las provincias.

La Constitución Fuegoña establece en su artículo 14, inciso 1, que “Todas las personas gozan en la Provincia de los siguientes derechos: 1 - A la vida desde la concepción”.

Asimismo, la ley 521 de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, particularmente sus artículos 7°.- “Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta Ley son de carácter enunciativo. Se les reconocen, por lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento jurídico y aquellos derechos concernientes a su condición de personas en desarrollo”; 8° “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida y a la salud. El Estado garantiza la protección de la vida y la salud mediante políticas sociales públicas, que permiten su desarrollo desde la concepción, en condiciones dignas de existencia.”

Y el 9° “La protección a la salud se garantiza desde la atención de la madre embarazada, considerando los siguientes aspectos: *a)* Atención médica prenatal, perinatal y posnatal; y *b)* apoyo alimentario a la embarazada y al lactante que lo necesiten...”.

Finalmente, la ley 1.218 en su artículo 1° instituye en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 25 de marzo de cada año, como el “Día de los Derechos del Niño por Nacer”, en tanto que de acuerdo al artículo 2° “El Poder Ejecutivo, a través de las áreas competentes, organizará anualmente en la cuarta semana del mes de marzo de cada año, una Jornada educativo cultural de información y concientización que tengan por objeto conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre.

Elaborará y gestionará un programa provincial que articule las políticas de Estado que refieran a la defensa de la vida en toda su extensión, en particular desde la concepción con acciones concretas debiendo para ello utilizar los recursos propios y aquellos que se gestionen ante las autoridades nacionales y organismos nacionales e internacionales”.

En este contexto: ¿Qué pasaría en mi provincia con respecto a los médicos, que no sólo se encontrarían con una ley inconstitucional por violentar flagrantemente el orden normativo superior, sino que incluso, colisionaría también con la constitución provincial y todo el orden normativo provincial que reconoce específicamente el derecho a la vida desde la concepción? Evidentemente, debería primar el principio del interés superior del niño, protegiendo la vida del niño en gestación. Aunque lamentablemente deba plantear esta contradicción e incertidumbre en sede judicial, con las consecuencias temporales que agravarían aún más la situación. De no hacerlo, el reproche penal lo acechará inmediatamente. Y haciendo el planteo también.

Muchas provincias como la mía reconocen y respetan la vida desde la concepción. En ocasión de la Convención Constituyente juré cumplirla y hacerla cumplir en cada ocasión que correspondiera y en cada lugar que me tocó defenderla. De igual modo que juré por la Constitución Nacional al incorporarme a esta Cámara.

Esto no es una decisión política. Va más allá, mucho más allá. Atraviesa a toda la sociedad.

La conciencia constitucional, jurídica y ética debe impulsarnos para rechazar enfáticamente este proyecto de ley que fomenta la anulación, invisibilización, desprotección y desconocimiento de la dignidad humana de los seres más vulnerables y sin voz, a los que se pretende quitar todo derecho, hasta del más elemental que es el de la vida. Aquí no hay margen para especulaciones políticas, económicas, coyunturales, emocionales, religiosas, etc. La vida se defiende o no, se protege o no.

Mis convicciones, trayectoria institucional y política, la realidad social y el cumplimiento a la promesa electoral efectuada, me llevan a rechazar con plena convicción y libertad este proyecto de ley.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR COSTA

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se introdujeron en el Código Penal de la Argentina algunas excepciones a la figura del aborto, admitiendo ciertas causales inspiradas en el Código Penal Suizo, me refiero específicamente a la causal de violación o de peligro de vida o de salud de la mujer. A 80 años de este acontecimiento histórico y a 37 años del regreso de la democracia, tenemos la oportunidad de re pensar y debatir sobre esta cuestión que innegablemente ocupa un lugar muy importante en la agenda de la salud pública: la prevención de embarazos no deseados y la falta de mecanismos para llevar a cabo de forma eficaz dicha prevención, son aspectos en los que el Estado debe intervenir. Llegar a la realización de un aborto es una tragedia, es una circunstancia que no deseamos que suceda, y debe ser la última opción para las mujeres y los varones que la enfrentan; debe ser la excepción.

Sin embargo, estamos ante una innegable realidad que convive entre nosotros de forma ininterrumpida: el aborto existe desde hace décadas en nuestro país. Convive entre nosotros de una manera oculta y silenciosa. Son múltiples las historias que conocemos de mujeres argentinas, que acompañadas por sus parejas o no, se enfrentan a la clandestinidad, a la soledad y el desamparo que la ilegalidad genera. Se trata de una realidad generalizada y cotidiana que está marcada por las distintas trayectorias de vida, donde las desventajas entre las personas se refuerzan ante la existencia de desigualdades preexistentes. Estamos hablando de un grave problema de salud pública a la cual el Estado, a través de sus leyes restrictivas, niega poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres. Y que además, mata.

Por eso creo, primeramente, que debemos partir del reconocimiento de que hemos fallado. Hemos fallado en todos los mecanismos previos a esta discusión, y este es un punto en el que todos estamos de acuerdo. Cada vez que una mujer toma la decisión de interrumpir un embarazo, el Estado ya ha fallado. Nuestro rol como legisladores es reconocer esta problemática, como en la misma medida lo es legislar por los derechos de quienes creemos, más lo necesitan.

En segundo lugar, creo que la respuesta de criminalización que el Estado argentino ha planteado hacia esta grave problemática demostró haber fracasado: no ha tenido efecto preventivo ni disuasorio, y ha producido un fuerte impacto en la salud de las mujeres y personas gestantes. Es decir, como lo ha dicho el doctor Gil Lavedra en su intervención en el Congreso de la Nación de 2018: “existe una despenalización práctica del aborto que ha impulsado a que hoy llevemos al papel aquello que hace tiempo existe en las calles de tierra y pavimento, por las que caminan cientos de mujeres desprotegidas, hoy, por el Estado”.

Estoy convencido que criminalizar a la mujer que interrumpe su embarazo significa, entre otras cosas, la renuncia del Estado en su rol de proteger la vida de las personas. Mis convicciones y creencias están basadas en la existencia de un Estado presente, un Estado que no puede mirar para otro lado, que debe renunciar al camino fácil de no intervenir. Y es aquí donde me pregunto: ¿Quién protege y acompaña hoy a estas mujeres? ¿Dónde está el Estado en su rol disuasorio, interviniendo bajo un marco de apoyo y reflexión?

Todos los que hoy estamos sentados aquí, tenemos la responsabilidad de abordar este doloroso problema, buscando las mejores respuestas posibles. El Estado argentino hoy tiene la oportunidad de hacerse presente. Como decía la legisladora francesa Simone Veil, en su discurso por la legalización del aborto en 1974: “Tenemos la oportunidad de dejar el camino fácil de la penalización para dotar de responsabilidad al Estado hacia respuestas realistas, humanas y justas”.

Hoy debemos legislar para acercarnos a estas mujeres que se encuentran con miedo y dolor en la clandestinidad. Claro que este acompañamiento debe comenzar mucho antes de que esa mujer deba atravesar la interrupción de un embarazo. Y aquí me refiero fundamentalmente a la aplicación de Ley de Educación Sexual Integral, que al no estar garantizada en todas las escuelas de nuestro país, reina la desinformación y la consecuente opresión que esta genera.

Sin embargo, aun teniendo esta instancia de prevención y educación, si la mujer decide continuar con la interrupción del embarazo, el Estado debe tener la oportunidad de intervenir propiciando un espacio de reflexión responsable y consciente sobre la gestación, brindando diferentes opciones. Si consideramos a la libertad como el derecho fundamental de la vida de todos los hombres y mujeres, el poder de decisión sólo puede ser posible desde la información. Es la desinformación –y la consecuente opresión que ésta genera– la que ha hecho que mujeres, adolescentes y niñas, en muchos casos, lleguen a la situación de requerir un aborto.

Por eso, señora presidenta, creo que tenemos mucho trabajo por delante, y que este debate confirma el rol fundamental que tiene el Estado en su firme convicción de acompañar a las mujeres y personas gestantes, durante toda su vida reproductiva desde un abordaje múltiple: i) garantizando la educación sexual integral en niños, niñas y adolescentes, ii) generando políticas activas y eficientes de prevención de embarazos adolescentes, iii) acompañando a aquellas personas que desean maternar como también a quienes lo desean pero no pueden llevar adelante un embarazo, y muchas veces les toca vivir situaciones negadas y tabú como es la muerte gestacional y perinatal, y

por último, iv) apoyando también la decisión de aquellas que quieren interrumpir su embarazo porque se trata de uno no querido, respetando las convicciones de la persona. En síntesis, hablo de un abordaje múltiple porque sabemos que inclusive una misma persona pueda atravesar todas estas etapas a lo largo de su vida. Y es en este punto donde el Estado tiene una función irrenunciable en cada una de estas situaciones, porque de lo que estamos hablando es del cuidado de la vida y la salud de miles de mujeres, dejando en claro que el proyecto de la maternidad es uno de los proyectos más valiosos que necesita ser acompañado.

No se trata de un gobierno u otro, o de los oportunismos que encierra el tratamiento del debate en este momento, se trata de pensar qué Estado queremos, de discutir el presente para proyectarnos para adelante donde las políticas públicas logren dar respuestas efectivas.

Yo soy un hombre que no le teme al futuro.

Anteriormente mencioné que tenemos mucho trabajo por hacer, porque hoy vemos un Estado débil que aún tiene enormes fallas en este camino, generando políticas ineficientes que no cumplen en su totalidad los objetivos buscados: i) prima un alto desconocimiento sobre la salud sexual y reproductiva en toda la sociedad, ii) son insuficientes los apoyos que se otorgan para el desarrollo saludable del embarazo y la infancia, iii) contamos con una Ley de Reproducción Médicamente Asistida, que se enfrenta a múltiples problemas por no ser respetada por las obras sociales abandonando a aquellas mujeres que tienen el derecho y el deseo de formar una familia, iv) no existe en nuestro país un protocolo de actuación que informe a los y las profesionales de la salud cómo desenvolverse ante la situación concreta de la muerte perinatal; v) la violencia obstétrica sigue siendo un grave problema de salud pública, que pone en riesgo el bienestar biopsicosocial de la mujer gestante y su familia.

Por esto, en todas las etapas de la vida reproductiva y las consecuentes decisiones de las personas, el Estado debe tener la oportunidad de acompañar y hacerse presente, fundamentalmente para velar por el cuidado y la salud. Y en este sentido, en aquellos casos donde la mujer decida avanzar en la decisión de interrumpir el embarazo, el Estado debe propiciar un espacio de reflexión responsable y consciente en relación a las consecuencias. Este espacio de reflexión que hoy estamos renunciando a tener, es parte del compromiso y promoción de los valores de la vida, como así también de la protección de las personas que habitan el suelo argentino.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que hoy estamos poniendo a consideración en este recinto, constituye una respuesta realista y aplicable a este angustiante problema. En ella se plantean tres objetivos que representan, a mi entender, la filosofía de este proyecto: 1) Despenalizar, 2) Legalizar la interrupción del embarazo, protegiendo la vida de las mujeres, avanzando en una legislación que combina plazos (14 semanas) y causales (las previstas por el código penal desde 1921) y 3) Desarrollar para todas la mujeres argentinas sin distinción de clase social, partido o religión, una política de elección informada a la hora de decidir, que tenga como eje la educación sexual, las políticas existentes de apoyo a la maternidad y la niñez, y por último, las implicancias de un aborto. En síntesis, se trata de una ley

aplicable que fomenta una política disuasoria mediante una elección informada y protectora.

De esta forma, como dije anteriormente, estamos renunciando al camino fácil y estamos planteando la necesidad de tener un Estado presente en esta problemática, que promueva y proteja la vida, que acompañe a cada uno de los argentinos y argentinas, y que, a la vez, sea un Estado que respete la libertad, las creencias y la convicción de las personas. Este camino es el mismo que han tomado los principales referentes democráticos: Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Irlanda, Suecia, Suiza, Uruguay, etc.

La representación democrática, señora presidenta, está sometida a una doble coacción. Por un lado, representa la diversidad de intereses que deben llegar a una coincidencia razonable, y por el otro representa la unidad de la vida social. Esta doble representación debe realizarse para que los ciudadanos se reconozcan como distintos, separados, pero también semejantes. En este debate soy consciente de que existen diferencias profundas, pero también sabemos que existen encuentros que nos unen: Hoy ya nadie debería dudar sobre la importancia de la implementación de políticas de educación sexual, y de prevención del embarazo adolescente. Hoy ya nadie debería dudar que la clandestinidad del aborto genera muertes evitables y provoca sufrimientos muy profundos. Con esta ley, estamos respetando las diferencias, y por sobre todo estamos acercando a cientos de miles de mujeres a la salud pública, en definitiva, al Estado. Este mecanismo se vincula principalmente con la ampliación de la democracia, y es lo que hoy estamos haciendo aquí.

Una vez más, retomo la reflexión de Simone Veil cuando cita a Montesquieu, “la naturaleza de las leyes humanas es estar sometidas a todos los accidentes que suceden y variar a medida que las voluntades de los hombres y mujeres cambian. Por el contrario, la naturaleza de las leyes de la religión es no variar nunca. Las leyes humanas se pronuncian sobre el bien, las leyes de la religión sobre lo mejor”. Este es el camino que hoy estamos recorriendo, nuestras leyes deben dar una respuesta a esta problemática, que respondan al orden de lo humano, de lo posible, generando disuasión y protección.

Para finalizar quiero reafirmar mi apuesta a la fuerza de la juventud. Como señaló Veil: “Las nuevas generaciones nos sorprenden en tanto se diferencian de nosotros; nosotros las criamos de manera diferente a la que nosotros mismos fuimos criados. Pero estos jóvenes son valientes, pueden ser entusiastas y sacrificarse como otros lo hicieron antes. Sigamos confiando en que sabrán conservar el valor supremo de la vida”.

Para cerrar, señora presidenta, mi compromiso es con un Estado presente que defiende la vida humana y enfrenta la tragedia del aborto de la mejor manera: mediante el acompañamiento y la decisión informada. Por todas estas razones y siendo consciente de los grandes desafíos que tenemos aún por delante en la construcción del Estado democrático que queremos, que respete las diferencias, nos encuentre unidos en puntos básicos, y por sobre todo garantice la salud de todas las mujeres de la Argentina, es que voy a apoyar con mi voto positivo el presente proyecto.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA TAPIA

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

Quiero enfatizar que no ha habido una mejora en la redacción de Diputados respecto de la original enviada por el Ejecutivo; más allá de que lo quieran vender como una concesión que suaviza las prescripciones extremas y violatorias del derecho humano a la objeción de conciencia. En ese contexto se debe garantizar la práctica en un plazo máximo de 10 días.

En el artículo 3° se invoca todo un marco normativo, vinculado al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, de una manera tramposa y, justamente, en el sentido contrario al que tiene. Se explayaron mucho los expositores sobre este punto y, por falta de tiempo, lo único que no puedo dejar pasar es el sinsentido de invocar, para justificar este proyecto, la Convención de los Derechos del Niño, que de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es obligatoria en todo su contenido, y que en su preámbulo establece –citando a la declaración de 1959– que “El niño, por su falta de madurez, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. ¿Qué protección legal le damos a los niños antes del nacimiento, al legalizar el aborto? Por si fuera poco, nuestro país considera que hay niño desde la concepción y esto incluye su interés superior, cuando pudiera haber un eventual conflicto de derechos.

Otro aspecto, el aborto aunque se practique en buenas condiciones sanitarias, tiene consecuencias psíquicas en la mujer y en su pareja. Si la salud integral, incluye el aspecto emocional, este factor debe ser considerado. Conocemos muchos testimonios de mujeres arrepentidas de haber tenido un aborto. Ni uno solo de mujeres que se arrepientan de no haber abortado, aun con embarazos vulnerables en los que evaluaron esa posibilidad.

Esta iniciativa se basa, además, en estadísticas falsas y manipuladas. Se nos llegó a decir, que el aborto es la principal causa de muerte materna, cuando está lejos de ser así y se hace muy poco, por atacar las principales causas de muerte materna en las que todos estamos de acuerdo en trabajar.

Realmente, es mucho más lo que se podría decir sobre este proyecto, si miramos con detenimiento su articulado, pero por lo apresurado de este tratamiento, –en el que hasta se limitó al extremo, el tiempo en el uso de la palabra en un tema tan complejo y profundo–, muchas cuestiones quedan al margen; espero que mis pares puedan profundizar en ellas, como por ejemplo el papel del varón en todo esto; el negocio que hay detrás del aborto legal a través de organizaciones internacionales que lo promueven, la agenda neomalthusiana que promueve el despoblamiento de los países del tercer mundo, y las consecuencias en el equilibrio demográfico, etcétera.

Se nos ha dicho, varias veces, que miremos un mapa para ver qué países tienen legalizado el aborto, remarcando la coincidencia de que los países más desarrollados tienen aborto legal y, por lo tanto, deberíamos hacer lo mismo nosotros, como signo de progreso. Es una falacia, como si esa fuera la receta para nuestra evolución. Resulta también que ese mismo mapa coincide con el de los países que tuvieron colonias, o fueron esclavistas, o conquistaron a los países de su entorno. Que basaron parte de su prosperidad en la opresión y en el sufrimiento de otros. Hay otras grandes coincidencias

en ese mapa, como por ejemplo los países que más contaminan en el mundo. ¿Será que en esas cosas también hay que imitarlos? A algunas de las senadoras –que, casualmente, eran del oficialismo– que nos invitaban a ver ese mapa, yo las invitaría, también, a que se percataran de que, casualmente, coincide con el de los países donde hay estabilidad, donde hay verdadera división de poderes, respeto por las instituciones, una justicia independiente y confiable, y otras varias cuestiones que no las veo promover tanto como promueven, con ese mismo mapa, el aborto.

El Poder Ejecutivo nos ha pedido que examinemos este proyecto conjuntamente con, el así llamado, de los Mil Días que espero tratemos a continuación. Ciertamente, el segundo proyecto no es consecuencia de un genuino interés por la salud de las mujeres, en particular de las que atraviesan embarazos vulnerables, ya que esa iniciativa que, en líneas generales, todos respaldamos, bien podría haber sido enviada a principios de año y hace tiempo que las mujeres podrían estar gozando de sus beneficios. Se trata de un proyecto que nos une. Sin embargo, cientos de miles de mujeres aún tienen que esperar esta ley, porque se ha utilizado como moneda de cambio, y en el marco de la estrategia para intentar suavizar –como si tal cosa pudiera hacerse– el proyecto de promoción del aborto que ahora examinamos. Si eso no es jugar con la vulnerabilidad de las mujeres cuyos derechos dicen defender, no sé qué es.

Quiero agregar además las notas enviadas, conforme al artículo 90 del Reglamento del Senado sobre las observaciones de los giros.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2020.

Señora

Presidente

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

S. / D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en calidad de presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, con motivo del expediente CD.-53/20 Proyecto de Ley en Revisión de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto, el que fuera girado, inicialmente, a las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud, a fin de solicitarle que se agregue la competencia a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, por las razones que se detallan a continuación:

Corresponde el giro a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, ya que según el artículo 81 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación corresponde a la misma dictaminar sobre lo relativo a la formación, protección y eventual reinserción de la infancia y la adolescencia (artículos 6°, 7° y 9° de la media sanción), como también en todo lo referente al estado y condición de la mujer (artículo 5°).

De igual manera, entenderá especialmente en los temas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 75 inciso 23, de la Constitución Nacional “[...] Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la

igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia [...]”.

Asimismo, la interrupción voluntaria del embarazo está íntimamente relacionada con la evolución del número de la población y la Comisión, en cuestión, es competente sobre las policías de estadística y censos, recursos humanos, planificación demográfica.

Una atenta lectura del referido proyecto y de las competencias que el Reglamento del Senado confiere a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, no puede dejar lugar a dudas de las coincidencias referidas.

Quiero remarcar, además, que la presente solicitud es formulada de acuerdo a las potestades que nos son conferidas por el artículo 90 de nuestro Reglamento, que vale remarcar se encuentra, plenamente, vigente en todos los asuntos no alcanzados por los protocolos de funcionamiento virtual del Cuerpo. A saber:

Artículo 90 - Si al destinarse un asunto existiese duda acerca de la comisión a que compete, la decidirá en el acto la Cámara. Ingresado un asunto a la Mesa de Entradas y a partir de su publicación en la Lista de Asuntos Entrados en el sitio Intranet del Senado, los señores senadores dispondrán de siete días hábiles para formular observaciones en cuanto al giro dispuesto para los expedientes. Las observaciones serán formuladas y debidamente fundadas por escrito y dirigidas a la Presidencia, la que resolverá en el plazo de tres días hábiles. En caso de que no sean resueltas en dicho plazo, la cuestión será puesta a consideración del cuerpo en la primera sesión que se realice. El plazo establecido en el segundo párrafo caduca en caso de que la comisión a la que fue girado el asunto haya producido dictamen previo a la petición de cambio de giro o a la resolución que la acuerde.

Vale destacar que se está formulando esta petición conforme a los plazos y modos establecidos en dicho artículo y, previamente, a la emisión del eventual dictamen.

Dada la extrema sensibilidad que este asunto tiene para toda la sociedad consideramos oportuno que se respeten todas las cuestiones reglamentarias.

Quedando a la espera de una pronta respuesta, o del eventual tratamiento en recinto de este asunto, la saludo con mi mayor consideración.

Y la siguiente nota:

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2020.

Señora

Presidente

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

S. / D.

Ref: Observaciones a giro de Exp. CD 53/20

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con motivo del expediente CD.- 53/20 Proyecto de Ley en Revisión de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto, el que fuera girado, inicialmente, a las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud, a fin de solicitarle que se agregue la competencia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda por las razones que se detallan a continuación:

En dicho proyecto y en los argumentos de quienes lo promueven, se considera que el aborto debería ser parte de las políticas públicas de salud, que en nuestro país se encaran de manera concurrente entre los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. En efecto, se establece, que toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud. Se establece, además, su gratuidad incluyendo al sector público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga. El mismo artículo establece que las prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio con cobertura total, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Independientemente, de la postura que se pueda tener sobre el aborto, se podría coincidir en dos cosas: en primer lugar, que no existe ninguna práctica médica en todo nuestro sistema de salud con una cobertura más amplia e integral que la que aquí se propone. En segundo lugar, que el reconocimiento legal del derecho al aborto gratuito y todas las demás prestaciones vinculadas a este, así como la atención postaborto pasarían a ser exigibles, constituyendo una obligación onerosa para el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, según el caso, los municipios y otros actores del sistema de salud, que debe ser, debidamente, estudiada y cuantificada.

Cabe recordar, que una de las anteriores presentaciones del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es muy similar en su espíritu al enviado por el Poder Ejecutivo nacional, el mismo -en la Cámara de Diputados- tuvo giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como es el caso del expediente 1.218-D-2012.

También es importante remarcar que casi todos los proyectos vinculados a coberturas de cuestiones médicas, sanitarias, deportivas, culturales o de cualquier otra índole, que impliquen erogaciones presupuestarias por mínimas que sean, incluyen el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por lo que también debería utilizarse ese criterio en este caso.

Si el proyecto enviado por el propio Poder Ejecutivo nacional que tramita bajo el expediente CD.- 54/20 "Proyecto de Ley en Revisión sobre Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia" tiene giro a dicha comisión, es razonable que también lo tenga el referido al aborto, que agregaría una prestación más al sistema de salud, como ya se dijo.

De no ser así se estaría dando el mensaje de que examinamos los costos solo de manera sesgada.

Quiero remarcar, además, que la presente solicitud es formulada de acuerdo a las potestades que nos son conferidas por el artículo 90 de nuestro Reglamento, que vale remarcar se encuentra plenamente vigente en todos los asuntos no alcanzados por los Protocolos de funcionamiento virtual del Cuerpo. A saber:

Artículo 90 - Si al destinarse un asunto existiese duda acerca de la comisión a que compete, la decidirá en el acto la Cámara. Ingresado un asunto a la Mesa de Entradas y a partir de su publicación en la Lista de Asuntos Entrados en el sitio Intranet del Senado, los señores senadores dispondrán de siete días hábiles para formular observaciones en cuanto al giro dispuesto para los expedientes. Las observaciones serán formuladas y debidamente fundadas por escrito y dirigidas a la Presidencia, la que resolverá en el plazo de tres días hábiles. En caso de que no sean resueltas en dicho plazo, la cuestión será puesta a consideración del cuerpo en la primera sesión que se realice. El plazo establecido en el segundo párrafo caduca en caso de que la comisión a la que fue girado el asunto haya producido dictamen previo a la petición de cambio de giro o a la resolución que la acuerde.

Vale destacar que se está formulando esta petición conforme a los plazos y modos establecidos en dicho artículo y, previamente, a la emisión del eventual dictamen.

Dada la extrema sensibilidad que este asunto tiene para toda la sociedad consideramos oportuno que se respeten todas las cuestiones reglamentarias.

Quedando a la espera de una pronta respuesta, o del eventual tratamiento en recinto de este asunto, la saludo con mi mayor consideración.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA TAPIA

(O.D. N° 719/20)

Señora presidenta:

Este proyecto me genera opiniones de alguna manera contradictorias. En parte celebro la propuesta, porque implica una ayuda concreta, aunque limitada y parcial, para las madres que cursan embarazos en situaciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, no celebro, sino que me alarma y entristece, el uso que se le pretende dar, como una especie de “moneda de cambio” por el proyecto del aborto. Como para suavizar el otro proyecto y decir que a las mujeres se les brindan alternativas al aborto, cuando no es así.

Hago una referencia a la iniciativa anteriormente tratada, porque los propios senadores que la impulsan, y el propio gobierno han insistido en que deben ser examinados en conjunto, dada la relación que hay entre ambos.

La muestra más acabada de que la prioridad es la promoción del aborto, es que primero se aseguraron de finalizar el tratamiento de ese proyecto para recién después comenzar con este otro.

¿Por qué no tratamos este proyecto al principio de la vigencia de nuestro protocolo de funcionamiento remoto? Si para esta propuesta no necesitaban saber si llegaban con los números, como lo demostró su sanción casi unánime por la Cámara de Diputados: 196 votos a favor, 0 negativos y 5 abstenciones.

Simplemente, se perdió el valioso tiempo de tener vigente esta iniciativa que hubiera favorecido a miles de mujeres, para poder hacerlo “jugar” con el proyecto del aborto y sumar, así, algunas voluntades. Especulación y oportunismo a la máxima potencia, pero en el medio están la salud y el acceso a derechos –que se vieron postergados– de miles de mujeres.

Resulta paradójico, también, que mientras en el proyecto de aborto se pretende asegurar a toda costa su implementación –incluso a costa del federalismo– al contener la cláusula de orden público, las buenas intenciones declarativas del proyecto de cuidado dependerán, para ser efectivas, de la coordinación con las jurisdicciones y, muy posiblemente, no se implemente del mismo modo en todo el país. Así lo reafirmaron los funcionarios que concurrieron al plenario de comisiones al respecto, ante varios senadores que preguntábamos sobre esa particularidad.

Me parece que también hace aún más evidente la priorización del aborto y la consideración, meramente, secundaria del proyecto que nos convoca ahora; si consideramos el tiempo dedicado a cada debate, y que para la anterior iniciativa el Ejecutivo envió al Senado funcionarios del más alto rango, mientras que para esta no fue así.

El proyecto, que por supuesto es preferible que existan las ayudas que propone antes que no tenerlas, se queda muy lejos de cumplir con la manda constitucional del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que me permito citar: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. Considero, sin embargo, que es un primer paso, que es importante dar. Espero podamos complementarlo con iniciativas que lo enriquezcan, y que sean tratadas con igual interés y prioridad como sucedió con el tema aborto.

Este proyecto, además, invisibiliza por completo a las niñas y a los niños por nacer que, sin embargo, nuestra Constitución Nacional, de alguna manera, hace presentes al hablar de niños durante el embarazo. Fue tan apresurado el tratamiento, que interesantísimas propuestas contenidas en los excelentes proyectos tenidos a la vista: de la senadora Blas, del senador Brailard Pocard –que he acompañado– y del senador Uñac, no pudieron ser tenidas en cuenta e incorporadas al texto, que hoy consideramos. Sin dudas, hubiera resultado un verdadero enriquecimiento para toda la sociedad. Felicito a los referidos senadores por sus proyectos.

Tampoco se han podido tratar muchas propuestas que se vienen presentando desde hace décadas, pero, particularmente, en los últimos años, por los diputados y los senadores, que suman más de 50, para la atención de las personas gestantes y, también, de las personas que están siendo gestadas. En esas iniciativas –a diferencia de la que hoy tratamos– se tienen en cuenta, también, a los grandes ausentes, los no nombrados en este proyecto que son las niñas y los niños por nacer, como antes dije.

En lo que hace al texto, la asignación por cuidado de salud integral sería la única medida concreta que impactaría en la madre, pero es una ayuda que llega tarde pues los momentos decisivos son las primeras etapas del embarazo. Además, ya existen muchos programas referidos a la salud materna y no se advierte cómo se coordinarán con esta iniciativa. Tampoco nos lo explicaron los funcionarios.

En la localidad de Las Heras, en mi provincia Santa Cruz, hace unos meses, una mamá embarazada de gemelos fue al hospital requiriendo atención, no la quisieron atender y terminó dando a luz a sus bebés en el baño y ambos murieron. Quién sabe si tal vez, de no haber hecho esperar este proyecto – que sabemos tenían redactado desde hace tiempo– porque especulaban con el del aborto, esta situación trágica, pero también criminal de parte de las autoridades, se hubiera evitado. Porque estaría vigente la jerarquización de los cuidados del embarazo aquí planteados.

Este proyecto se queda a mitad de camino, a sociedad demanda y merece respuestas más integrales. Espero podamos tratarlas pronto.

Muchas gracias.

Quisiera agregar la nota que conjuntamente con el senador Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud, enviamos solicitando el giro del expediente CD.-54/20 a la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2020.

Señora

Presidente

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

S. / D.

Nos dirigimos a usted, en calidad de presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, y presidente de la Comisión de Salud, con motivo del expediente CD.- 54/20 Proyecto de ley en revisión sobre ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, el que fuera girado inicialmente a las comisiones de Salud, y de Presupuesto y Hacienda, a fin de solicitarle que se agregue la competencia a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, por las razones que se detallamos a continuación:

- 1) En la Cámara de Diputados el proyecto fue girado a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De acuerdo a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, las competencias relativas a la “Acción Social” que integran y dan nombre a la comisión que fuera cabecera en la Honorable Cámara de Diputados, corresponden en el Honorable Senado de la Nación a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Adicionalmente, de la letra y del espíritu del proyecto se desprende centralmente su relación con la asistencia social.

2) El proyecto hace referencia al cuidado de las personas embarazadas, y podemos leer en el referido artículo del Reglamento como una de las competencias de la Comisión:

“Dictaminar (...) todo lo referente al estado y condición de la mujer.” Agregando además como otra de sus competencias que “entenderá especialmente en los temas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 75 inciso 23, de la Constitución Nacional”. Consideramos oportuno para arrojar más claridad a los fundamentos que sustentan ésta solicitud transcribir dicha referencia, que habla nada menos que de las atribuciones del Congreso de la Nación, entre ellas: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres (...)”

3) Otra de las competencias es la relativa a la primera infancia, tema que también titula y del cual versa el proyecto en examen. Así se desprende de las citas precedentes, y de la vinculada a otra sección inherente a las competencias del Congreso conforme al ya citado artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia...”

4) En atención a lo que el propio presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, ha expresado en el mensaje de elevación del proyecto que examinamos, en relación a que se presenta para dar una respuesta a las personas embarazadas en situación de vulnerabilidad, cabe recordar que ésta comisión, de acuerdo a nuestro reglamento “También dictaminará (...) en lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y la marginalidad social”

5) El artículo 25 del referido proyecto establece elaborar un listado de indicadores para “aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos”. Las cuestiones relativas a población, indicadores demográficos, estadísticas y censos es competencia de la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Una atenta lectura del referido proyecto y de las competencias que el Reglamento del Senado confiere a la Comisión de Población y Desarrollo Humano no puede dejar lugar a dudas de las coincidencias a las que nos hemos referido.

Queremos remarcar además que la presente solicitud es formulada de acuerdo a las potestades que nos son conferidas por el artículo 90 de nuestro Reglamento, que vale remarcar se encuentra plenamente vigente en todos los asuntos no alcanzados por los Protocolos de funcionamiento virtual del Cuerpo. A saber:

Artículo 90 - Si al destinarse un asunto existiese duda acerca de la comisión a que compete, la decidirá en el acto la Cámara. Ingresado un asunto a la Mesa de Entradas y a partir de su publicación en la Lista de Asuntos Entrados en el sitio Intranet del Senado, los señores senadores dispondrán de siete días hábiles para formular observaciones en cuanto al giro dispuesto para los expedientes. Las observaciones serán formuladas y debidamente fundadas por escrito y dirigidas a la Presidencia, la que resolverá en el plazo de tres días hábiles. En caso de que no sean resueltas en dicho plazo, la cuestión será puesta a consideración del cuerpo en la primera sesión que se realice. El plazo establecido en el segundo párrafo caduca en caso de que la comisión a la que fue girado el asunto haya producido dictamen previo a la petición de cambio de giro o a la resolución que la acuerde.

Vale destacar que se está formulando esta petición conforme a los plazos y modos establecidos en dicho artículo y, previamente, a la emisión del eventual dictamen.

Dada la extrema sensibilidad que este asunto tiene para toda la sociedad consideramos oportuno que se respeten todas las cuestiones reglamentarias.

Quedando a la espera de una pronta respuesta, o del eventual tratamiento en recinto de este asunto, la saludo con mi mayor consideración.

María Belén Tapia. — Mario Fiad.

6

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI

(O.D. N° 719/20)

Señora presidenta:

Resulta inconcebible que en el mismo día que se trata la legalización del aborto, también se pretenda aprobar el “Plan de los 1000 días” que, de acuerdo a palabras textuales del propio presidente, “busca bajar la mortalidad de los niños de la Argentina”.

Independientemente de esta contradicción, este “Plan de los 1000 días” viene a reforzar el enfoque netamente asistencialista de las políticas sociales de este gobierno, un sello distintivo del pobrismo kirchnerista. Una vez más, se apela a parches asistencialistas y populistas que no resuelven el problema de fondo. Consideramos que es necesario dar un acompañamiento integral a la persona gestante. Sin embargo, nuestras familias siguen sin tener condiciones estructurales que les permita progresar para salir de la pobreza y la exclusión.

Desde el punto de vista presupuestario, no existe una sola estimación del costo que la implementación de estos programas podría llegar a tener. Y cuando eso ocurre se corre el riesgo de terminar licuado los beneficios que se quieren ampliar. Uno de los grandes desafíos que tenemos en esta Cámara es dejar de votar cosas que suenan bien pero que no establecemos de donde saldrán los recursos, porque se generan expectativas que luego no se cumplen.

Este plan, como tantos otros que tuvo nuestro país en las últimas décadas, para lo único que han servido es para reforzar ese círculo vicioso de pobreza, desigualdad y exclusión. Por eso les pido a los señores y señoras que están

en el gobierno que no nos mientan, y que dejen de usar las necesidades desde los más vulnerables como cortinas de humo, porque mientras que, con esta ley se amplía los subsidios del estado; en este preciso momento la Cámara de Diputados está sesionando un proyecto enviado por su Gobierno que es un ajuste salvaje a nuestros jubilados.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO

(O.D. N° 719/20)

Señora presidenta:

El proyecto de ley que hoy tratamos, venido en revisión de Diputados, crea un programa de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y primera infancia, más conocido como “Plan de los 1000 días”.

Quiero destacar el trabajo e iniciativa que al respecto tuvieron mis colegas senadores, particularmente el senador Rubén Uñac, quien fue autor de una iniciativa similar que hoy es ley en mi provincia.

Vale también poner de manifiesto que soy autor de iniciativas con objetivos similares. Una de ellas presentada en el año 2019 por la que disponía crear el Programa Integral de atención a menores adolescentes, embarazadas y grupo familiar (Expediente S.-2.404/19) con el fin de brindarles contención y orientación, propiciar condiciones favorables en su entorno familiar y social y disponer asistencia nutricional entre otros objetivos.

De igual forma, presente este año un proyecto que tenía como antecedente uno presentado en el año 2017 por la senadora mandato cumplido Liliana Negre de Alonso, por el que proponíamos la creación de un Plan Nacional de Nutrición y Estimulación temprana (Expediente. S.-2.974/2020) disponiendo, entre otros objetivos, una cobertura y cuidado integral de salud desde la etapa del embarazo tanto para la persona gestante como para el menor, procurar asistencia alimentaria complementaria, así como promover la lactancia materna.

Manifestaba en su fundamentación “la necesidad de erradicar la desnutrición infantil y promover la estimulación temprana como un desafío constante e impostergable para todos. Que el entendimiento de que el capital humano es una de las principales riquezas de los países, y que tanto la nutrición en las etapas iniciales de la vida de los menores, como así también la educación, son aspectos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las personas.”

Estos proyectos no tuvieron lamentablemente tratamiento en comisiones pero celebro que podamos hoy tratar esta iniciativa con similares objetivos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, como Tratado internacional con jerarquía constitucional nos dice en su Preámbulo que: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de la protección y cuidados especiales, incluso de la protección legal, tanto antes como después de su nacimiento.”

El Estado debe ser un agente activo, presente que defienda los derechos de sus ciudadanos pero sobre todo de los más vulnerables.

Por ello, convencido de la necesidad de la defensa de la vida desde sus inicios, del interés superior del niño como principio rector de toda decisión e intervención, del valor de la identidad y de la familia como bienes superiores de la persona, es que acompaño con mi voto positivo el presente proyecto de ley.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

Tenemos en tratamiento, para mí en mi segunda intervención, un tema de suma importancia, en una situación de contexto en el país que difiere profundamente del momento en el que se realizó el tratamiento de este tema en el año 2018, como es la situación actual con la que aún, nueve meses después de la primera medida de aislamiento obligatorio por la Pandemia del COVID-19, nos obliga a ponderar la vida y la salud por sobre todas las cosas.

Hemos soportado durante estos meses la pérdida de seres queridos, enfrentar la enfermedad con consecuencias aún no determinadas en su totalidad, el aislamiento, que los niños y niñas no puedan asistir a la escuela, no ver a las familias, no ver a los abuelos y abuelas o adultos mayores, no poder velar a los familiares fallecidos, las secuelas de la enfermedad para quienes la padecieron, la pérdida de empleos, el sistema de salud abarrotado y todos los esfuerzos estatales por dotarlo de los equipamientos adecuados y el personal idóneo, los profesionales de la salud que vienen dando todo para enfrentar esta pandemia, en fin todos estos temas, y muchos más, nos hicieron valorar la vida por sobre todas las cosas.

Entonces, en este orden de ideas, resulta paradójico valorar la vida de algunos, pero desestimar la de otros. En esta situación de pandemia, donde la vida ha sido el valor máspreciado de todas las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, donde la vida ha sido valorada como fin último y primigenio, donde los más vulnerables han sido los primeros tenidos en cuenta por todas las acciones de gobierno a fin de cumplir con los mandatos de la justicia social, aprobar un proyecto que desestima sin más la vida de los niños y niñas concebidos, se aleja en mi punto de vista de toda razón y justicia.

El Poder Ejecutivo Nacional, envía junto con este proyecto en debate, el proyecto de “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primer Infancia”, conocido como el “Plan de los 1000 Días”, cuyo objeto es “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

En este sentido, resulta contradictorio a mi entender, que por un lado estamos ponderando un sistema que intenta luchar contra la mortalidad infantil, ayudando a las madres embarazadas y a los niños y niñas hasta los mil días, y por el otro lado estamos poniendo todo el aparato del Estado para abortar la vida de los niños.

En el mismo orden de ideas, tanto en el artículo 3º del proyecto de ley que legaliza el aborto, como en el artículo 2º del proyecto de los mil días mencionan en su “Marco normativo constitucional” que “Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias”.

Sin embargo, estos fundamentos jurídicos son los que aseguran que lo fundamental es la protección de la vida, y es paradójicamente lo que no estamos haciendo con la sanción de este proyecto de legalización del aborto. Además, nuestro Código Civil es imperativo al enunciar en su artículo 19, que: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción.”, y en el artículo 23 establece la capacidad de ejercicio de derecho que se confiere a partir de su existencia y prescribe que: “Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial”.

Es decir que nuestro Código Civil, aún después de su reforma, determina claramente que la persona humana existe a partir de su concepción y a partir de allí se le confiere derechos; entonces claramente estamos afectando derechos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico además de actuar contrarios a nuestra Constitución Nacional por cuanto nuestro país adoptó a la Convención de los Derechos de los niños con rango y jerarquía constitucional, al establecerla en el artículo 75, inciso 22. Por otra parte, en el inciso 23 de la misma se establece que debemos “Legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, en congruencia con lo establecido en nuestro Código Civil,

a partir de la concepción de la existencia de la persona humana, si eliminamos esa existencia? Además, la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, claramente establece la obligación de respetar el Interés Superior del niño reconociendo en su artículo 3 inciso a) su Condición de sujeto de Derecho.

Señora presidenta, como mencioné en el inicio, por segunda vez debo intervenir en este recinto abordando el mismo tema, el aborto, o muerte de niños y niñas, y lo digo sin eufemismos por más títulos edulcorados que se quiera poner a este proyecto de ley. El IVE, ó interrupción voluntaria del embarazo, es para mí, ni más ni menos que dar muerte por un medio mecánico o químico a un niño o niña que se encuentra en el vientre materno, poniendo en forma voluntaria la vida de una persona en las manos de otra. Es mi plena convicción.

Un argumento que escuché reiteradamente por los impulsores del proyecto, es que se lo debía acompañar porque era una promesa de campaña de nuestro presidente. Pues bien, sabe el señor presidente de la Nación de mi compromiso de acompañar todas las políticas que hacen al bienestar de nuestro pueblo y así lo vengo haciendo en forma irrestricta hasta este momento. Pero nada tiene que ver la convicción del señor presidente en este tema del aborto, con la convicción que tengo y que tiene la inmensa mayoría del pueblo de la provincia que represento.

De hecho, nada relevante a cambiado entre el proyecto de aborto que voté rechazándolo en el año 2018, con el que hoy tenemos a consideración. Por lo tanto, sería contradecir mis convicciones y la del pueblo de Santiago del Estero que renovó su confianza en las últimas elecciones y que volvió a darme el mandato de votar en contra de interrumpir la vida en el embarazo.

Quiero ser muy claro en esto, estamos favoreciendo una práctica que coloca a las más vulnerables y a los más vulnerables en un estado de indefensión insoslayable. Por supuesto que seguro ninguna mujer quiere abortar. Por supuesto que seguro ninguna mujer quiere llevar en su conciencia terminar con la vida de su bebé en su seno materno. Pero, ¿en realidad creemos que estamos ayudando a la mujer? ¿Evaluamos correctamente las consecuencias que tiene para la salud mental de esa mujer la práctica abortiva?, quien luego de pasar por un shock emocional, es difícil que lo pueda superar a lo largo de los años. Es más, ese estado de shock emocional, y según lo mencionado por psicólogos en este debate, se activa con los años.

Entonces, legislemos para mejorar las condiciones de atención médica, del acceso a clínicas y hospitales, de educación sexual en niños, niñas y adolescentes, en que nuestro sistema estatal de contención se oriente a quienes menos recursos tienen, en fin, concentrémonos en mejorar nuestro sistema de salud en general.

El Estado tiene que estar para garantizar la vida y la salud de ambos y para tutelar la indefensión y el interés superior del niño y de los más vulnerables, interés superior que la Convención de los Derechos del Niño menciona en todo su texto y que no se está teniendo en cuenta con la sanción de esta ley.

Los científicos y médicos han hecho ingentes esfuerzos para mejorar las condiciones de viabilidad de los niños por nacer, aún con pesos que en décadas pasadas eran impensados para que pudieran seguir con vida. Reconocemos, y ponderamos con declaraciones esos esfuerzos, que hoy permiten que niños y niñas de tan sólo 700 gramos puedan sobrevivir aún con ese bajo peso. ¿Entonces por otra parte, vamos a legalizar la práctica de terminar con la vida y contradecir esos esfuerzos? Es a mi entender, inaceptable por escaparse a mi humilde entender, de toda lógica.

Por otra parte, estamos estableciendo la permisión de la práctica abortiva hasta la semana catorce, es decir, vamos a considerar entonces que, hasta esa semana, a pesar de ser persona humana tal como lo define nuestro Código, no tiene derechos, es decir no será persona, tanto como que podemos poner fin a su vida y por lo tanto será considerada persona luego de esa semana catorce. Ilógico en todo sentido, ya que contradecemos nuestro ordenamiento jurídico y afectamos toda la congruencia de nuestro Código Civil. Nuevamente, se escapa de toda lógica jurídica.

En definitiva, señora presidenta, no se ha producido en el debate del proyecto ningún hecho nuevo que pueda convencerme y por lo tanto dar cuenta al pueblo de mi provincia, si hubiera una decisión contraria a la que voté en el año 2018. La Academia Nacional de Medicina establece que la vida humana comienza con la fecundación, comienza ya con una carga genética que lo convertirá en un ser con características propias. No son personas futuras, ya desde la misma concepción “son personas”. Por eso este proyecto que debatimos, rompe desde su inicio con toda la armonía normativa, va contra los Tratados Internacionales, y con la concepción que tiene la doctrina en la que me formé, la doctrina justicialista.

Desde allí nuestra doctrina fue forjando el camino y la educación para proteger cada vez con mayor integralidad, no solo al hombre y mujer adulta, sino a los niños quienes eran el desvelo permanente de nuestra querida Evita. Así transcurrieron distintas leyes protectoras de la mujer y del niño que portaba en su seno desde el momento de su concepción, hasta llegar a la Constitución del '94, donde se incluye con rango constitucional, los Tratados que protegen al niño, niña y adolescentes sin distinguir entre los derechos del niño nacido del no nacido.

Como mencioné, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales protectores de la Niñez no dejan margen para el debate en este sentido. Al niño se lo protege desde el embarazo o concepción y el más importante derecho a proteger es su vida.

Sentadas las bases constitucionales y jurídicas sobre la existencia y protección de los derechos de las personas desde la concepción, cualquier norma que fuera contraria a esta protección es claramente inconstitucional, por lo tanto, no cabe la posibilidad de legislar correctamente contra el derecho a la vida de la persona por nacer, sin al mismo tiempo ir en contra de la Constitución y las leyes vigentes del país.

Por todo lo expuesto señora presidenta, no es una cuestión de convencimiento valorativo, sino que no encuentro fundamentos jurídicos que avalen la posición a favor del aborto. No es una postura arcaica, ni dogmática, es sencillamente entender con coherencia nuestro ordenamiento jurídico. Por

supuesto que las leyes se construyen acompañando a los cambios en la sociedad, pero nunca cuando el reclamo se hace afectando el bien supremo que debemos proteger como es el Derecho a la Vida. Simplemente entiendo y es mi plena convicción que la vida de uno no puede defenderse agrediendo y matando la vida de otro.

Así lo entiendo, por lo que, por mis convicciones jurídicas y personales en defensa de la vida desde la concepción, por la base doctrinaria de mi Partido, mi voto es negativo al presente proyecto.

9

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CASTILLO

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

Llevamos ya unas buenas horas de un debate importante, que nos ha trascendido a nosotros en el espacio y en el tiempo. En el espacio, porque obviamente está afuera ya de nuestra hermosa casa, de nuestro hermoso Congreso: uno viene y hay gente en la calle. Es un debate que en el tiempo, también: no solo en este tiempo que hemos estado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino desde hace bastante tiempo atrás; y nos va a trascender porque, seguramente, no va a concluir esta noche.

El tema es extenso y complejo. De hecho, si tuvimos temas duros, este me parece que es el tema –al menos de mi parte; y llevo varios años en el Congreso de la Nación– más duro; me parece que lo más importante es a partir desde qué punto de vista encuadramos al debate. Creo que gran parte de lo que hemos venido viendo en las charlas en las comisiones era cuál es el encuadre que le damos a un tema que, de por sí, es difícil, donde están en juego cuestiones de valores, cuestiones jurídicas y cuestiones filosóficas. Pero hay una cuestión casi de previo y especial pronunciamiento. Estamos sentados en nuestras bancas con un grado de responsabilidad: ¿debemos actuar solamente de acuerdo con la base de nuestras creencias o en la defensa y en el trabajo de las políticas públicas? De hecho, a veces se trata de dos temas distintos. A veces, nuestras creencias nos llevan también a la inmutabilidad. ¡Somos todos parte de una sociedad y somos todos parte de las creencias que tenemos! No quiero dejar de lado.

Soy católico. He tomado las creencias que mis padres me legaron. Es más: cuando fui gobernador, aboqué mi gobierno a nuestra Virgen del Valle. ¡Llevé el bastón a la Virgen del Valle! Algunos dicen que primero fue pagana. Siempre ocurre con nuestras imágenes que suelen ser paganas: los indios la valoran y luego la Iglesia las toma. Esto es legítimo. Ahora, ¿yo tengo que abordar todos los temas desde las creencias?

Hay una religión –y discúlpenme el dislate– en la que en algún momento debió haber existido la enfermedad de la triquinosis; esto, hace varios miles de años. Entonces, como todos eran ignorantes, dijeron: “Che, curemos este tema desde la religión: no coman más cerdo”. Bueno: ¡hay alguna religión donde las chuletas de cerdo y los alimentos derivados del cerdo hace varios miles de años que no se comen! Digo: de pronto hay cosas que se abordan desde donde se tienen que abordar y hay otras cosas que se abordan desde

la responsabilidad de la política, de los hechos para los hechos. De los hechos para los hechos porque uno mira la realidad y la realidad va cambiando constantemente. Entonces, es ahí donde ciframos este encuadre que para nosotros es ineludible. Es decir: tomar las normas como normas públicas, como políticas públicas.

Se ha dado un debate extraordinario no solo en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados. Se ha dado un debate que realmente nos ha servido a todos. Creo que gran parte de la sociedad ha seguido el debate por los medios; opiniones no solo de los que vinieron acá, sino también escritas en los diarios. Hemos aprendido muchas cosas: nosotros, los protagonistas y la gente. Seguramente, hemos dejado de lado tabúes y cosas que estaban escondidas se han visualizado. Entonces, más allá de las posiciones que tenga cada uno, se han enriquecido las posturas.

Por ahí uno tiene amigos de afuera y siempre valoran de los argentinos que somos cultos y muy inteligentes. Pero hay una cuestión con nosotros: que nos vamos hacia los extremos. Tomamos las cosas a veces desde el sentido común y las llevamos a los extremos y nos “extremizamos”. Así como los científicos hablan de tesis, antítesis y síntesis y las sociedades caminan alrededor, a nosotros esos comunes denominadores nos suelen ser muy difíciles. Es muy difícil ver cómo podemos ir hilvanando o debatiendo temas.

Es más: yo acá he escuchado a biólogos cuyos extraordinarios argumentos nos han desasnado de varias cuestiones. Pero, lejos de tomar esos buenos argumentos como elementos para una interacción con las otras posiciones, ¡no!: tomamos esos buenos elementos para fortificar nuestras propias posiciones. Entonces, desde ahí, nos es muy difícil.

Desde que este tema está en debate en la República Argentina, hay muchos otros países del mundo que han tomado el punto, le sacaron las cuestiones de creencias religiosas y filosóficas y han avanzado. Así es que han logrado algunos tipos de leyes. No las he leído a todas, pero algunas van por la situación de la causalidad; otras, dando mejor término a la autonomía. Pero, a ver: son países que tienen idiosincrasias no muy distintas a la nuestra. Hablamos de España, de Italia y de hasta el último caso, que es Irlanda. Irlanda es un país con un 80 por ciento de una religión marcada. Sin embargo, han avanzado y logrado este tipo de cuestiones. A los argentinos –y no solo en este tema; aquí está más visualizado– eso nos ha costado. Recién sobre esta noche empezamos a ver algunos “proyectitos” que nos llegan. Pero, claro...

Me hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que el Congreso argentino tomó este tema? Código Penal, 1921, artículos 85. Seguramente, las causalidades puestas hace casi cien años eran hasta adelantadas, como indicó recién el senador Ernesto Martínez. Pero, ¡claro! Hay dos posturas. Una, la de tomar la ley, aun con el esfuerzo de las modificaciones que se plantearon; y la otra es directamente no tomarla.

Me hago una pregunta sincera: ¿no ha pasado nada en este país durante cien años? Porque el resultado de la no aprobación de la ley es que estemos en la situación en que estamos ahora, con las responsabilidades de los hechos que van a ocurrir después de lo que suceda esta noche. No me refiero a cuestiones sociales, sino a los hechos concretos sobre el tema que llevamos adelante.

Realmente, ¿tenemos algún argumento para sostener que la sociedad argentina del siglo XXI es igual que la de 1921? Con alguna cuestión de reconocimiento y honestidad intelectual, ¿no podemos argüir que fracasó estrepitosamente el concepto de penalización? ¿De que esa prohibición penal no ha servido para nada, al menos en las conductas de la gente? Es más: en algunos casos, hasta ha profundizado las desigualdades sociales que existen en virtud del género.

Yo no quiero traer acá la expresión del doctor Favalaro. Lo dijeron en la comisión y lo han dicho acá; ¡un párrafo extraordinario de Favalaro definiendo este tipo de cuestión! Pero la pregunta es: ¿no pasó nada?

En este Senado de la Nación hay treinta mujeres senadoras sobre un total de setenta y dos. Usted, señora presidente, preside este hermoso Senado. ¡En 1921 no podían votar! Digo esto para marcar que creo que algo ha pasado en este país a lo largo de cien años. Obviamente, en la próxima elección este tema va a estar presente. Habrá más o menos mujeres sentadas en sus bancas, pero seguramente nadie va a pasar por el tamiz de las elecciones sin este tema, fundamentalmente puesto allí como una cuestión básica.

Yo no soy un jurista y no puedo entrar en detalles de temas de envergadura ni de constituciones en la mano, pero la Constitución, en su artículo 75, inciso 22, que es el que hace el reconocimiento de todos los pactos existentes y preexistentes, en realidad es el modo de interpretación. ¡Allí no hay prohibiciones puestas!

Respecto de los temas de la inconstitucionalidad, que por ahí algún colega planteó como una cuestión fundamental, yo le diría que no nos hagamos tanto problema porque los organismos que deben tomar este tema son los que nos aconsejan determinados tipos de conductas al Derecho positivo argentino.

El plexo de normas ha sido planteado con mucha brillantez acá por Fernández Sagasti y los dos senadores por Chubut. No quisiera ampliar sobre esto ni entrar sobre los casos que se han dado con seguridad, pero sí quiero plantearme una cuestión, que es la cuestión de interpretación de esto.

Acá nos dicen de la vida; de que está la argucia de que no se da la palabra niño; de que no se da la palabra feto; de que no se da la palabra embrión. Más allá de cualquiera de estas cuestiones, el concepto de interpretación de esto es que no existen derechos absolutos. Cuando alguien acá hoy fundamentó sobre los derechos absolutos, se tuvo que remontar al Derecho Romano y contar cómo alguien era esclavo si no pagaba las deudas. ¡No existen derechos absolutos! Es más, hay muchísima bibliografía sobre esto. Pero no existen derechos absolutos; y la interpretación en cuanto a que nos rigen las normas internacionales tienen que ver con el sentido de la proporcionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no tomó el sistema de proporcionalidad que viene en los controles de constitucionalidad de Alemania. ¿Por qué? Porque la Corte nuestra tiene otro criterio, que es el criterio de la razonabilidad, pero deja que este criterio de proporcionalidad sí lo tomen los tribunales inferiores cuando se trata de cuestiones en conflicto.

Cuando los principios constitucionales que puedan estar en juego son convergentes no hay ningún problema. El problema surge cuando entran en conflicto. Pongamos dos derechos en conflicto que hagan, por ejemplo, a la

libertad de tránsito; y por otro lado, la libertad de manifestación pública de una huelga. ¿Cómo se falla? ¿Se da prioridad a una? ¿Se da prioridad a otra? ¿En qué grado se da prioridad a una y en qué grado se da prioridad a otra? La jueza Kemelmajer dio el ejemplo: el de las injurias a un político. Es decir, la libertad de prensa frente al derecho a la privacidad. Pero como se trataba de una persona pública es la real malicia: es decir, el conjugar de estas cuestiones.

En Alemania, por ejemplo, se planteó en algún momento el tema de la libertad de empresa y de trabajo de las tabacaleras frente al otro derecho, que es el de la salud. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Prohibimos el tabaco? Alguno habrá dicho: “Che, podemos hacer como la ley seca de Estados Unidos.” Es decir, esto nadie lo va a cumplir. ¿Cuál fue la cuestión? Plantear que en las etiquetas de cigarrillo aparezcan esas fotos horribles: si vos querés tener una enfermedad, ya lo vas sabiendo. Es decir: es el planteo y es el modo de interpretar que se tiene en todos estos tribunales y surgió de teorías... A ver: uno de estos teóricos de esto se llamaba Robert Alexy, un alemán que nació en 1945. En el primer libro que escribió sobre filosofía del Derecho dice qué es el derecho. Le contestaron que, bueno: el Derecho es una cuestión de los teóricos, de los prácticos. Sí, está bien: ¿pero qué es el Derecho en un régimen fascista, en un régimen nazi, en un gobierno de facto? ¿Cómo es el Derecho en los gobiernos injustos?

Cuando te dicen cómo es el derecho, te salen con la pirámide de Kelsen, la asamblea primera, bla, bla, bla. ¡Sí, está bárbaro! Cada uno se correlaciona con otro. ¿Pero cómo es el derecho en esos regímenes? A partir de esa teoría y de esa filosofía del derecho va naciendo el concepto de los derechos humanos en el mundo. A partir de él, a partir de Rossi –que escribió cuarenta o cincuenta años antes– y son los elementos de interpretación que hoy tienen los organismos internacionales.

Veo que cuando hablan de la proporcionalidad; que hablan del peso, del contrapeso; que hablan de la gradualidad, nos miran como si defendiéramos de acá como que el derecho argentino.... ¿Qué derecho argentino, si nuestra misma norma constitucional es una muy buena copia de don Alberdi –¡gracias a Dios!– que la copió de un estado extraordinario como el americano. Nuestro Código Penal es una copia de los códigos alemanes. Tomamos la fuente del Código Civil, de Vélez Sarsfield, y bueno... ¡Savigny! ¡No, no, no! Nosotros no tenemos la autonomía de esto. Sí tenemos que recurrir a quienes nos interpretan en este tipo de cuestiones

Siempre, en materia jurídica, hay un 50 por ciento de biblioteca y un 50 por ciento de biblioteca. A veces son las cuestiones políticas, las cuestiones de actitudes, las cuestiones de momento y las cuestiones de tiempo las que van cambiando.

A modo anecdótico –y ya no traigo más el tema de Alfonsín y la Convención Constituyente–, el miembro que vino acá a informarnos y que nos planteaba la inconstitucionalidad de la actual norma, fue el mismo que le planteó a Alfonsín, allá en Santa Fe, que cuando Alfonsín se retiró le dijeron: “Che, dejate de prurito jurídico que acá vamos a perder la reforma de la Constitución”. Y esa Constitución se sancionó sin ese pedido ahí. ¡No vengamos hoy con que eso es inconstitucional!

¿A qué voy con esto? A que es muy probable que alguna Corte vaya a declarar inconstitucional este vetusto Código Penal que todavía tenemos en esos artículos cuando esto se lo esté planteando.

Yo creo que estamos frente a un proyecto de ley que, como todos los proyectos de ley, son superables, son posibles. Este es un proyecto de ley que se inscribe dentro del marco de género. Es del siglo XXI: el siglo en que se suponía que las mujeres iban a tener todas las reivindicaciones. Voy a empezar desde el siglo XXI: en el 2008, la ley de trata de personas; en el 2009, se crea la Oficina de la Mujer, la ley de protección integral de las mujeres; en el 2012, el fallo del que acá hemos hablado...

La ley del parto humanizado, la ley de partida de género, la ley de igual salario de las mujeres. ¡Hasta las artistas hoy están planteando en Hollywood la necesidad de que la mujer tenga el mismo reconocimiento que el hombre! Más: la licencia por paternidad me parece que también es un derecho de la mujer que hoy se está planteando.

Digo que esta ley, por un lado, es pragmática porque en lo comparativo va a bajar la mortalidad en la cuestión puntual, pero baja la cifra de los abortos. No hace falta irnos a otro lado. Vamos a Uruguay para comparar cómo esto ha ido bajando.

La ley, como se dijo acá, no obliga. Si bien es cierto que no constituye la mayor causa de los problemas de salud en la Argentina, sí es la causa principal de muerte por maternidad en la República Argentina.

Igualitaria: tomo lo de Favalaro.

Después, da dos o tres temas. Las consejerías: sobre las consejerías, que está en la ley, quiero decir algo. Las consejerías hoy existen. Empezó en la provincia del Neuquén. En la provincia de Catamarca funcionan las consejerías. ¿Saben cómo funcionan? Funcionan en la misma maternidad. Hay un grupo de pobres médicas y médicos a los que miran como con ojos distintos. Allí hay sicólogos y médicos. Llega la persona con su tema y me decía la sicóloga: "Mirá, cuando la escuchamos ya hay una contención; ya hay una contención." Si a esas cuestiones de género nosotros le pusiéramos una cuestión interdisciplinaria -es decir, pusiéramos a alguien de Acción Social, alguien del Ministerio del Trabajo, alguien de Vivienda-, ¿ustedes saben cuánto paramos realmente este problema? Estos son hechos que existen, son parte de la modernidad.

Mire, presidenta: yo voy a terminar. Termino diciendo una sola cosa: la historia de nuestro Derecho, la historia de nuestras libertades en la República Argentina, es la historia de la secularización. Yo creo que el 25 de mayo y el 9 de julio fueron actos de secularización. Creo que aquella Asamblea del XIII, que se la debemos a San Martín, fue un extraordinario acto de secularización, cuando se decretó la libertad de vientres y terminamos -nada más y nada menos- en América con la Inquisición diez años antes que en España. También fue un acto de secularización la Constitución de 1853, que consagró la libertad de culto.

No voy a hablar del pobre Nicasio Oroño, a quien se le ocurrió hacer la ley de matrimonio civil en 1868. Terminó con la provincia intervenida y él excomulgado, cuando creía que estaba solucionando un problema de todos los gringos, de distintas razas y credos, que venían y a quienes quería casar. No

había forma de casarlos de otra manera que no fuera por una ley civil. Recién en la década del 80, viene el reconocimiento por la ley de matrimonio civil, la 2.393, a instancia del general Roca. Fue también un acto de secularización.

Fue también un acto de secularización en este país cuando empezábamos a crecer y teníamos que contarnos: ver cuánto crecíamos...

Y crear el Registro Civil.

Fue un acto de secularización la ley 1.420, que fue un debate extraordinario: menos de uno de cada cinco argentinos estaban alfabetizados en este país.

Yo vi en su despacho una foto de Roca; y me parece muy bien que usted venere a Roca. Roca fue el autor de la ley. No fue ni Sarmiento ni fue Mitre: la llevó él. A él le tocó, en la historia política. ¿Sabe qué hizo? ¡Lo echó al nuncio apostólico de la República Argentina bajo el planteo de inmischirse en las políticas internas de nuestro país! Por supuesto, después lo arregló en el segundo mandato, pero lo echó. ¡Se sabía por qué se hacía esto! Treinta años después, este país era el más alfabetizado de América, después de Japón y después de Francia.

Y otro acto de secularización fue lo acontecido en la Primera Guerra Mundial: un país que quería entrar a disputarle al mundo sus cuestiones. ¡Teníamos que hacer lo mismo que habíamos hecho con la escuela primaria! La reforma universitaria, la que se dio en Córdoba, la que empezó un gran proceso de crecimiento del país.

Termino, señora presidente, de la siguiente manera. Las otras dos libertades que vinieron acá -y acá voy al tema- han sido el divorcio y la ley de matrimonio igualitario. Pero, ¿saben cómo se llegó? Con el divorcio, como con la ley de matrimonio igualitario, pasaba lo mismo que pasa hoy: ¡los políticos no se querían meter! “No vaya a ser que perdamos votos si tomamos una decisión sobre esto; no vaya a ser que la Iglesia nos apriete, que los sectores de poder...” Hubo un señor que se había casado después de treinta años de estar separado de otra señora y dijo: “Yo voy a meter una demanda para declarar la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2.393, que es la indisolubilidad del vínculo”.

Recién, un senador acá me decía de las normas pétreas. Está el fallo de la Corte: de Bacqué, de Petracchi y de Fayt; un fallo extraordinario, donde se marca la dinámica de derecho. Una ley que nació siendo constitucional, por el paso del tiempo, como no servía para regular la vida de los argentinos, se convirtió en inconstitucional. ¡Ese fallo convirtió en inconstitucional el artículo 64 de la ley 2.393! ¡Hablamos de dos millones de argentinos que estaban separados; que estaban condenados a no poder casarse, a no tener hijos, a vivir en soledad por una ley arcaica que devino inconstitucional! Esa es la belleza de lo laico.

Esa es la belleza de actuar con la responsabilidad política y civil y dar las respuestas que los tiempos nos exigen. Ocho meses después era ley. Alfonsín, rápidamente, cuando vio la sentencia, la mandó; y lo mismo hizo Kirchner con lo otro. Porque la ley...

La ley de matrimonio igualitario -lo dije acá, en este recinto-, ¿saben cómo fue? Un chico le dijo a su padre: “Papá, soy gay y convivo con otra criatura”.

Y el padre le dijo: “Perfecto, yo soy chapado a la antigua; andá, casate.” ¡Fue a la Justicia y logró la sentencia! Una sentencia judicial abrió la puerta para que se pudieran casar personas del mismo sexo. Después vino la ley. Con esto va a pasar algo parecido. Si nosotros no avanzamos, la gente y la propia Justicia son quienes modifican los derechos positivos.

Termino de la siguiente manera. Cuando este país creció, se desarrolló, desde Aaron Castellanos en adelante, cuando venían todos los inmigrantes a hacer esta República Argentina, ¿sabe por qué vinieron? Porque este era un país laico, no un país convencional; porque este era un país en donde regulábamos a partir de nuestra Constitución para que vengan todos los hombres y mujeres del mundo a poblar este suelo argentino.

Sigamos trabajando para la libertad. No hagamos leyes para algunos. Hagamos leyes para todos; gracias.

10

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA

(O.D. N° 719/20)

Señora presidenta:

En conjunto con la interrupción voluntaria del embarazo, hoy nos toca también debatir el proyecto denominado programa de los Mil Días, un proyecto que en lo particular considero muy oportuno, menos controvertido, o si se me permite la expresión, quizás con menos grieta, dado que no dudo que cualquiera de los presentes hoy aquí, y que en algún momento hayan gobernado o formado parte de algún gobierno en alguna jurisdicción de este extenso país, comparta conmigo la idea de que las políticas dirigidas a la primera infancia son la inversión social más rentable, que se proyecta para toda la vida, mejorando la capacidad de aprender, la equidad, la inclusión social, y el futuro laboral. La atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia son esenciales para el desarrollo y la calidad de vida, en este caso, de los sectores más vulnerables.

Este proyecto que tiene como objeto fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y de los niños y niñas en la primera infancia, haciendo referencia a los primeros 3 años de vida, también busca reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia.

Y es además un compromiso que asumió el Poder Ejecutivo en la apertura de la asamblea legislativa el 1° de marzo en este mismo Congreso, que tuvo como un eje importante incorporar como prioridad el acompañamiento de la salud de las madres y garantizar una buena salud durante al menos los primeros años de vida que tan importante son para el desarrollo futuro como persona. Un ejemplo de cómo cuidar a través de políticas públicas en materia de salud.

La provincia de Santiago del Estero fue una de las pioneras en el abordaje de esta temática, siguiendo los pasos de San Juan, y países como Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, entre otros. Desde el año 2018, contamos con un programa cuasi homónimo denominado “Mis Primeros 1700 días”, bajo el lema

“Santiago acompaña, cuidando la vida, nutriendo el futuro, con prácticamente las mismas prestaciones que el enviado por el ejecutivo, que es muy exitoso y con estadísticas que arrojan datos que nos enorgullecen, entendiendo que el mismo no debe ser un programa más, sino la articulación de acciones con demostrada eficacia durante el embarazo e infancia temprana en el sistema de salud, que brindan herramientas para un mejor cuidado de los niños.

Fuimos y somos testigos, de que este tipo de políticas son esenciales y muy efectivas para el cuidado de las mujeres y los y las niñas, brindando asistencia sanitaria, educación nutricional y un suplemento alimenticio destinado a embarazadas, a mujeres durante el periodo de lactancia, y al bebé desde los 6 meses hasta los 4 años, de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada etapa de la vida, que incluye a niños con discapacidad, con distintas patologías, y/o niños con desnutrición, siempre con el objetivo de asegurar un desarrollo y crecimiento óptimo, que al fin y al cabo es el derecho que todos y todas las niñas deberían tener.

En Santiago del Estero, son 15.800 coprovincianos y coprovincianas, los y las beneficiarias, de los cuales 2.800 son mujeres embarazadas y puérperas en etapa de lactancia, y 13.000, son niños y niñas de 6 meses a 4 años, distribuidos en 124 centros e instituciones en diferentes zonas.

En este contexto de pandemia, aumentó de forma considerable el cupo de beneficiarios, es así, que cuenta con distribución no sólo en las Unidades Primarias de Atención (UPA), los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Postas Sanitarias, Merenderos y Comedores, sino que, se implementó el programa en diferentes organismos tales como, comisiones municipales, ONG, bibliotecas, fundaciones, entre otros.

Este programa, es un claro compromiso con las mujeres, con la infancia y el futuro de los santiagueños, tomando la propuesta como un desafío para hacer más integrales y equitativas las políticas de salud, tomando como una política de Estado que acompaña el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.

El programa de los Mil Días es una oportunidad para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, abarcando el área de salud y de nutrición, con el objetivo disminuir la mortalidad y morbilidad en los niños, incrementar el desarrollo cognitivo y emocional, mejorar las habilidades sociales y de aprendizaje, reducir la obesidad y enfermedades crónicas, acrecentar la capacidad de trabajo y la productividad, logrando una nutrición óptima y un adecuado desarrollo fetal e infantil.

Sin dudas, señora presidenta, que las acciones preventivas en este periodo generan mayores posibilidades de tener una vida sana y productiva en el futuro, fortaleciendo lazos familiares y con la comunidad, por lo que es importante que, desde el Estado, podamos garantizar el cuidado integral de la salud a todas las mujeres que transitan el periodo de embarazo y posparto, y a todos aquellos niños y niñas durante sus primeros años de vida, como una política de salud pública.

Es por lo expuesto, señora presidenta, que voy a acompañar con mi voto esta iniciativa.

11

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA

(O.D. N° 716/20)

Señora presidenta:

Nos encontramos ya cerrando el año, debatiendo un proyecto cuya importancia atraviesa más de un aspecto de nuestra vida, de nuestras creencias, y de nuestro plexo normativo. Contrariamente a lo que se pretende instalar, este no es un debate moderno, ni progresista, ni religioso dado que históricamente el ser humano se ha ocupado del proceso de la concepción y contracepción de su propia especie.

Estratégicamente, quienes promueven la aprobación de esta norma, han tratado de instalar en la sociedad dos argumentos: el primero es la deshumanización del feto, señalando que este puede bajo determinadas circunstancias no ser merecedor de la vida (algunos dicen que no tiene vida porque es un “fenómeno”), y el segundo, quizás con el objeto de desinformar, es la suavización terminológica dentro de las propuestas normativas.

Es decir, no estamos solo debatiendo la despenalización del aborto, sino además la legalización de la terminación de los embarazos no deseados o quizás un programa de finalización voluntaria de embarazos no deseados a cargo de los gobiernos provinciales y/o del sistema de salud en general, algo que tienen bien claro algunos colegas, pero que por algún motivo evitan mencionar.

O sea que al sistema de salud al que se le pidió que trabaje a destajo para salvar vidas durante la pandemia, exponiéndose a contagios a riesgo de muerte, ahora se le pide que finalice con vidas no deseadas, porque entre deseo, mérito y antigüedad el niño por nacer no debe continuar viviendo.

Por otro lado, algo que nos llama poderosamente la atención en el presente debate, es el ensañamiento que hay con distintas entidades religiosas, especialmente con la Iglesia Católica, señalándola como un ente que no debe meterse en los asuntos del Estado, y cuya perversidad afecta los intereses de la sociedad en su conjunto. O sea que cuando la Iglesia se manifiesta en contra de la usura del FMI, sí queremos que intervenga, pero cuando se manifiesta en contra de alguna otra política, que a su entender y el mío también, responde a otros intereses y no los del Estado, le pedimos que se llame a silencio.

Moral, humana, religiosa y legalmente, la propuesta tiene contradicciones que hacen difícil -por no decir imposible- nuestro acompañamiento. Pero la contradicción que más nos preocupa es el aspecto constitucional.

En la tarea de legislar, el Congreso debe realizar un doble control de constitucionalidad. Por una parte, debe controlar la constitucionalidad de la norma proyectada respecto de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, y por otra parte, debe controlar también la compatibilidad de la norma con el reparto de competencias entre la Nación y las provincias establecido por la Constitución Nacional de acuerdo con nuestro sistema federal.

En relación al primer control, en este ámbito y en la Cámara Baja, ya se han expuesto con amplitud y solvencia los análisis -que comparto- referidos a la inconstitucionalidad e inconveniencia de los proyectos por ser lesivos al derecho a la vida, expresamente protegido desde la concepción. Al respecto el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna, que ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos cuyo artículo 4° dispone que:

"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente...". en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Argentina formuló como reserva que, entendemos como niño todo ser humano desde el momento de su concepción.

A su vez, el artículo 6° de la mencionada Convención establece que: "Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño"; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente".

Surge con claridad entonces que todo el plexo normativo como exteriorización de la voluntad social a través de las normas constitucionales y en la voluntad legislativa, en nuestro país deja traslucir que adhiere y protege de manera inequívoca a la vida desde el momento mismo de la concepción. Por lo tanto, sin el derecho a la vida, todos los demás derechos se tornan ilusorios.

Respecto al análisis del segundo control. En este sentido, adelanto que el proyecto es también inconstitucional al establecer normas procedimentales y reglamentarias en contradicción con las constituciones provinciales. En nuestro sistema federal, como regla histórica, la Nación legisla en materias delegadas; las provincias, en materias reservadas, y la regla de deslinde está precedida por el artículo 121.

Ahora bien, el proyecto regula un derecho con deberes de prestación positiva a cargo del Estado y de los particulares, lo que incluye -tal como están redactados- normas procesales y de implementación que estarán a cargo de los estados provinciales y sus instituciones públicas y privadas. Olvidando, que las provincias están habilitadas a ampliar la protección de los derechos y garantías, como efectivamente ha sucedido históricamente, con la sola condición de que el constituyente local no invada el ámbito de poderes delegados al gobierno federal.

En ejercicio de su poder constituyente, doce provincias argentinas han establecido en sus constituciones la protección del derecho a la vida desde la concepción, y diez de ellas lo hicieron sin la frase "en general" que se invoca en la exposición de motivos del proyecto y que ha funcionado como resquicio interpretativo en los fallos allí mencionados. En las convenciones constituyentes provinciales, al introducir el derecho a la vida desde la concepción se lo hizo con expresa referencia a la finalidad de sostener la ilicitud del aborto.

En concordancia con la protección del derecho a la vida desde la concepción, las provincias han regulado en sus cartas el derecho a la salud, haciendo énfasis en el deber de los órganos estatales de respetar y proteger el derecho a la vida de los niños por nacer.

Teniendo en cuenta que en el proyecto se invoca el derecho a la salud, puede afirmarse que la regulación de tal derecho en una visión armónica y dinámica de nuestro sistema federal es una materia concurrente, o sea, pueden regularla la Nación y las provincias en sus respectivos ámbitos.

De tal modo, las normas procedimentales y reglamentarias previstas en los proyectos que contienen prohibiciones, cuyo incumplimiento se apercibe con graves sanciones y el mandato a las provincias de dictar y realizar acciones para cumplir tales disposiciones, resultan también inconstitucionales por colisionar con las normas provinciales sin que exista preeminencia alguna de la ley nacional.

Toda pretensión de imponer forzosamente una uniformidad legislativa que prescinda de los derechos y garantías que válidamente han reconocido las constituciones provinciales, configura un avasallamiento de la autonomía provincial y una violación a la forma federal establecida en nuestra Constitución.

Como dije en 2018, como sociedad jurídicamente organizada, las políticas públicas deben estar destinadas a la construcción de caminos e instrumentos que salvaguarden la vida, lo que de ningún modo implica desconocer la dolorosa situación de vulnerabilidad y desamparo que sufren muchas mujeres, y que un Estado moderno de Derecho debe generar, cada vez con más fuerza, todas las estrategias positivas posibles, como solución a esa problemática para amparar y proteger a todos y cada uno de los ciudadanos, pero teniendo como prioridad a los más débiles, y es allí entonces, que en este debate que se ha abierto, no cabe duda que el niño por nacer es el que debe ser protegido prioritariamente en su derecho a la vida.

Yo quiero finalizar con dos pensamientos. El primero, expresado por la Madre Teresa de Calcuta, cuando frente a líderes mundiales decía: "...Hoy el más grande crimen contra la paz es el crimen contra los niños inocentes nunca nacidos. Si una madre puede matar a su niño ¿qué nos impide a ti y a mí matarnos el uno al otro?".

Y las palabras del doctor Matías Pedernera Allende, profesor de Derecho Constitucional: "...no habría nada que discutir si el derecho a la vida y la salud de la mujeres, fueran las únicas variables de este debate...quién podría oponerse que otro ciudadano ejerza el derecho a la vida y a la salud?...sin embargo el debate resulta controvertido, esto es porque efectivamente existe otro polo de la discusión: el de la vida humana; porque el Congreso brindara una respuesta institucional a una pregunta profunda "¿cuando alguien es un ser humano, y cuando no lo es?. Si el proyecto de la despenalización del aborto resultase ley, la respuesta del Congreso sería que los seres humanos son tales cuando nacen. Previamente se trataría de una cosa que se puede extirpar libremente antes de las 14 semanas, luego hasta el nacimiento, será una cosa que siente, por ello su extirpación no sería tan libre".

En otras palabras, despenalizar el aborto para terminar con embarazos no deseados no resuelve el problema sino que elimina simplemente el derecho a la vida de una persona por nacer. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?

Por lo expuesto, adelanto mi posición en contra de la interrupción o finalización de los embarazos no deseados en nuestro país.